

Distr.
GENERAL

CAT/C/7/Add.14
18 de enero de 1993

ESPAÑOL
Original: CHINO

COMITE CONTRA LA TORTURA

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 19 DE LA CONVENCION

Informes iniciales que los Estados Partes deben presentar en 1989

Adición

CHINA*

[8 de octubre de 1992]

INFORME ADICIONAL PRESENTADO A LAS NACIONES UNIDAS EN APLICACION
A LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES

1. La República Popular de China se afana por promover el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Participó activamente en la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (llamada a continuación "la Convención"), que ratificó en septiembre de 1988. El 3 de noviembre del mismo año, China pasó a ser oficialmente Parte en dicha Convención.

* El presente documento contiene el informe adicional de China pedido por el Comité contra la Tortura en su cuarto período de sesiones, al terminar el examen del informe inicial de China (CAT/C/7/Add.5), que tuvo lugar el 27 de abril de 1990 (véase CAT/C/SR.50 y 51 y el informe anual del Comité contra la Tortura, Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo quinto período de sesiones, Suplemento N° 44 (A/45/44), párrs. 471 a 502).

2. De conformidad con las disposiciones del artículo 19 de la Convención, China presentó su informe inicial sobre la aplicación de la Convención en diciembre de 1989. El Comité contra la Tortura (Naciones Unidas) examinó ese informe el 27 de abril de 1990. El presente informe adicional se presenta sobre la base del informe inicial, de conformidad con la petición del Comité.

3. El presente informe adicional, que sigue las orientaciones del Comité en lo que respecta a la redacción de informes, comprende dos partes principales. En la primera se encontrarán informaciones de orden general, tales como un resumen de los sistemas político, legislativo y judicial de China; la segunda parte trata de la aplicación por China de los artículos 2 a 16 de la Convención. De conformidad con la presentación pedida, los miembros del Comité encontrarán en los párrafos pertinentes del presente informe adicional, en atención a las disposiciones concretas de la Convención, respuestas a las diversas preguntas formuladas con ocasión del examen del informe inicial de China sobre la aplicación de la Convención.

Parte I

GENERALIDADES

A. Estructura del poder del Estado

4. La Constitución de la República Popular de China instituye el régimen político de la Asamblea Popular Nacional cuyo principio es el centralismo democrático y en el cual todo el poder pertenece al pueblo. La Asamblea Popular Nacional está integrada por diputados elegidos por un mandato de cinco años por las provincias, las regiones autónomas y los municipios directamente subordinados al poder central, así como por las fuerzas armadas.

5. Los órganos del Estado son los siguientes: la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente, el Presidente de la República Popular de China, el Consejo de los Asuntos de Estado, la Comisión Militar Central, las asambleas populares locales de diversos niveles, los órganos de administración de las regiones autónomas nacionales, los tribunales populares y las fiscalías populares.

6. La Asamblea Popular Nacional es el órgano supremo del poder del Estado. Ejerce el poder legislativo del Estado y decide sobre las principales cuestiones relativas a los asuntos del Estado. Elige y puede relevar de sus funciones al Presidente y al Vicepresidente de la República Popular de China, al presidente de la Comisión Militar Central, al presidente del Tribunal Popular Supremo y al fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema; escoge y puede relevar de sus funciones al primer ministro del Consejo de los Asuntos de Estado, los viceprimeros ministros, los ministros de Estado, los ministros, los presidentes de las comisiones, el presidente de la Comisión de Cuentas y el secretario general de dicho Consejo.

7. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional es su órgano permanente. En el intervalo entre las reuniones de la Asamblea ejerce, según el mandato que le confiere la Constitución, cierto número de poderes supremos del Estado. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional se compone del presidente, los vicepresidentes, el secretario general y algunos miembros de la Asamblea.

8. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional ejerce en especial las funciones y los poderes siguientes: interpretar la Constitución y las leyes y velar por su aplicación; en el marco de las disposiciones de la Constitución, ejercer el poder legislativo; examinar y controlar la conformidad de los reglamentos administrativos y de los reglamentos de carácter local con la Constitución y las leyes; examinar y aprobar los proyectos referentes a reajustes parciales del plan para el desarrollo de la economía nacional y el desarrollo social, así como del presupuesto del Estado; controlar las actividades del Consejo de los Asuntos de Estado, de la Comisión Militar Central, del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema; decidir sobre las demás cuestiones importantes de interés para el país; ejercer las demás funciones y poderes que le confiera la Asamblea Popular Nacional.

9. El Presidente de la República Popular de China ocupa un lugar importante en la estructura del Estado. En virtud de las decisiones de la Asamblea Popular Nacional y de su Comité Permanente, promulga las leyes, nombra o destituye de sus funciones al primer ministro, a los viceprimeros ministros y a los ministros y los presidentes de las comisiones, proclama el estado de guerra y decreta la movilización, ratifica y denuncia los tratados y los acuerdos importantes concertados con los Estados extranjeros, etc.

10. El Consejo de los Asuntos de Estado de la República Popular de China (es decir el gobierno popular central) es el ejecutivo del órgano supremo del poder del Estado, el órgano administrativo supremo del Estado. De conformidad con las disposiciones de la Constitución, es reponsable ante la Asamblea Popular Nacional y ante su Comité Permanente. El Consejo de los Asuntos de Estado se compone del primer ministro, los viceprimeros ministros, los ministros de Estado, los ministros, los presidentes de las comisiones, el presidente de la Comisión de Cuentas y el secretario general. El primer ministro asume la plena responsabilidad del Consejo.

11. La Comisión Militar Central de la República Popular de China es el órgano dirigente supremo de todas las fuerzas armadas del país; su presidente asume la plena responsabilidad de la Comisión y es responsable ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente.

12. Las asambleas populares locales en los diversos niveles son los órganos locales del poder del Estado. Velan por la observancia y la aplicación de la Constitución, de las leyes y los reglamentos administrativos en su circunscripción administrativa respectiva y ejercen los demás poderes que les confieren la Constitución y las leyes. Los gobiernos populares locales en los diversos niveles son los ejecutivos de los órganos locales del poder del Estado, los órganos administrativos locales del Estado en los diversos niveles. Dentro de los límites de los poderes que les confiere la ley, dirigen, en su región administrativa respectiva, las actividades en las esferas de la economía, la educación, la ciencia, la cultura, etc.

13. Los gobiernos populares locales en los diversos niveles son elegidos por las asambleas populares del nivel correspondiente, son responsables ante ellas, les dan cuenta de sus actividades y están colocados bajo su control. Los gobiernos populares locales de distrito y de niveles superiores son responsables, en el intervalo entre reuniones de las asambleas populares del mismo nivel, ante los comités permanentes de las asambleas populares del mismo nivel y les dan cuenta de sus actividades. Son al mismo tiempo responsables ante el nivel inmediatamente superior del gobierno popular y le dan cuenta de sus actividades. Además, los gobiernos populares locales en los diversos niveles son órganos administrativos del Estado colocados bajo la dirección única del Consejo de los Asuntos de Estado y sometidos a su autoridad única.

14. Los tribunales populares son órganos judiciales del Estado y constituyen uno de los engranajes del poder del Estado. La Constitución y la ley orgánica relativa a los tribunales de la República Popular de China establecen las jurisdicciones siguientes: el Tribunal Popular Supremo, los tribunales populares locales en los diversos niveles, los tribunales militares y otros tribunales populares especiales. Existen cuatro categorías de tribunales populares, de conformidad con las divisiones administrativas de China:

el Tribunal Popular Supremo, los tribunales populares de categoría superior, los tribunales populares de categoría intermedia y los tribunales populares de base. Los tribunales populares especiales son jurisdicciones establecidas para conocer los asuntos en sectores particulares; comprenden los tribunales militares, los tribunales de los ferrocarriles, los tribunales de los asuntos marítimos, etc. Los tribunales populares especiales no corresponden a las divisiones administrativas y entienden únicamente de asuntos penales, civiles, económicos o administrativos ordinarios. Sólo juzgan de los asuntos en relación con ámbitos o ministerios determinados, o asuntos específicos. El Tribunal Popular Supremo controla las actividades judiciales de los tribunales populares especiales. El Tribunal Popular Supremo es responsable ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. Los tribunales populares locales en los diversos niveles son responsables ante las asambleas populares de los mismos niveles y sus respectivos comités permanentes. Los tribunales populares de los niveles superiores controlan la actividad de los tribunales populares de los niveles inferiores.

15. Las fiscalías populares son los órganos del Estado encargados de controlar la aplicación de las leyes y constituyen igualmente uno de los engranajes del poder del Estado. En virtud de las disposiciones de la Constitución y de la ley orgánica relativa a las fiscalías populares de la República Popular de China, las fiscalías populares comprenden: la Fiscalía Popular Suprema, las fiscalías populares locales en los diversos niveles y las fiscalías populares especiales. Las fiscalías populares locales en los diversos niveles comprenden: las fiscalías de provincia, las fiscalías de región autónoma, las fiscalías de municipio directamente subordinado a la autoridad central; las secciones de las fiscalías de provincia, de región autónoma y de municipio directamente subordinado a la autoridad central; las fiscalías de departamento autónomo y de municipio directamente subordinado a una provincia; las fiscalías populares de distrito, de municipio, de distrito autónomo y de circunscripción urbana. Las fiscalías populares especiales comprenden en especial las fiscalías militares y las fiscalías de ferrocarriles.

B. Las fuentes del derecho en China

16. En China, el derecho procede de tres fuentes: la Constitución, las leyes y los reglamentos administrativos.

17. Elaborada tras una larga consulta con las masas populares, la Constitución de China consagra la experiencia histórica de la nación china. Define los grandes principios fundamentales de la vida del país y de la sociedad, como por ejemplo el sistema político del Estado, el sistema económico, la forma de organización del Gobierno, los derechos y los deberes del ciudadano, etc. La Constitución es aprobada y modificada por la Asamblea Popular Nacional, y sus disposiciones jurídicas prevalecen sobre todas las demás leyes y reglamentaciones, que se basan y se apoyan en ella. La Constitución actual fue examinada y promulgada el 4 de diciembre de 1982 en la quinta sesión de la quinta Asamblea Popular Nacional.

18. Las leyes son elaboradas por la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente, con arreglo a un procedimiento legislativo determinado. Las leyes aprobadas se refieren a menudo a aspectos fundamentales e importantes de las

relaciones sociales (cuestiones de orden penal, cuestiones de orden civil relativas a las personas o a los bienes, etc.).

19. De conformidad con la Constitución, el Consejo de los Asuntos de Estado tiene poder para tomar por decreto medidas administrativas, elaborar leyes y reglamentos administrativos y tomar decisiones y dictar órdenes. Las leyes y los reglamentos administrativos deben ser conformes a la Constitución y a las leyes y no pueden contradecirlas. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional tiene poder para anular los reglamentos administrativos, las decisiones y las órdenes emanados del Consejo de los Asuntos de Estado que sean contrarios a la Constitución y a las leyes. El Consejo de los Asuntos de Estado está facultado para modificar o anular las decisiones y órdenes mal fundadas que emanen de órganos administrativos locales en los diferentes niveles.

C. Los órganos de justicia y sus funciones

20. En el sentido más amplio, los órganos de justicia comprenden en China los tribunales populares, las fiscalías populares y los órganos de seguridad pública y los órganos de administración judicial dependientes del Consejo de los Asuntos de Estado.

21. Los tribunales populares tienen la misión de juzgar con toda independencia de conformidad con la ley los asuntos penales, civiles, los procesos de índole económica, los procesos en materia marítima y comercial y los asuntos administrativos y, mediante sus sentencias, castigar a los delincuentes, resolver las diferencias civiles, defender la dignidad de las leyes y del sistema del país, mantener el orden social, proteger los bienes del Estado y de los ciudadanos y garantizar la inviolabilidad de las personas. Los tribunales populares proceden de manera independiente, de conformidad con las disposiciones de la ley, y no admiten injerencia alguna de los órganos administrativos, de las agrupaciones sociales o de los individuos. Los tribunales populares aplican la regla de la doble instancia de jurisdicción, siendo definitiva la decisión tomada en segunda instancia.

22. Según la naturaleza de los asuntos de que conocen, los tribunales populares se dividen en jurisdicciones civiles, jurisdicciones penales, jurisdicciones económicas y jurisdicciones administrativas.

23. Los tribunales populares de base juzgan en primera instancia los asuntos penales y civiles ordinarios, resuelven las diferencias civiles sencillas y los asuntos penales menores que no requieren una audiencia y dirigen los trabajos de las comisiones populares de conciliación.

24. Los tribunales populares de categoría intermedia instruyen en primera instancia los asuntos penales siguientes: asuntos contrarrevolucionarios; asuntos criminales ordinarios que puedan dar lugar a una condena a reclusión perpetua o a la pena capital; asuntos penales relativos a delitos cometidos por extranjeros o violaciones de los derechos legítimos de extranjeros por ciudadanos chinos; asuntos penales y asuntos civiles que tengan repercusiones importantes en su propia jurisdicción aun siendo de la competencia de los tribunales populares de base en primera instancia, y que les sean remitidos por éstos; los casos de apelación y recurso contra sentencias y decisiones de

los tribunales populares de base, así como los casos que sean objeto de una apelación interpuesta por el ministerio público de conformidad con el procedimiento de control de las decisiones judiciales.

25. Los tribunales populares de categoría superior instruyen a los asuntos criminales importantes que interesan a toda la provincia (o municipio directamente subordinado a la autoridad central o la región autónoma) y los asuntos civiles de primera instancia que tengan repercusiones importantes en su propia jurisdicción, los asuntos que sean remitidos en primera instancia por los tribunales populares de categoría inferior, los casos de apelación y recurso contra sentencias y decisiones de los tribunales populares de categoría inferior, así como los casos que sean objeto de una apelación interpuesta por el ministerio público de conformidad con el procedimiento de control de las decisiones judiciales.

26. El Tribunal Popular Supremo instruye los grandes procesos criminales nacionales que interesen al país entero y los asuntos civiles que tengan repercusiones importantes en el plano nacional, así como los asuntos que a su parecer deba juzgar él mismo en primera instancia, los casos de apelación y de recurso interpuesto contra sentencias o decisiones de los tribunales populares de categoría superior y de los tribunales populares especiales, y los casos de apelación interpuesta por la fiscalía popular suprema, de conformidad con el procedimiento de control de las decisiones judiciales. Se encarga además de la interpretación judicial de problemas concretos de aplicación de los textos legislativos y reglamentarios durante los procesos.

27. En virtud de las disposiciones de la Ley Orgánica relativa a las fiscalías populares de la República Popular de China, las fiscalías populares en los diversos niveles tienen, entre otras, las siguientes funciones:

1. Incoar procedimientos en los casos de traición a la patria, tentativa de desmembración del país y asuntos criminales importantes que perjudiquen gravemente la política, las leyes, las órdenes y los decretos del Estado.
2. Instruir los asuntos penales que se les sometan directamente.
3. Examinar los asuntos que sean objeto de una encuesta por parte de los servicios de la seguridad pública, decidir si ha lugar a una detención, incoar procesos o renunciar a ellos, controlar la legalidad de la encuesta realizada por los servicios de la seguridad pública.
4. Ejercer la acción pública, una vez iniciada; controlar la legalidad de las sentencias de los tribunales populares.
5. Controlar la legalidad de la ejecución de las sentencias y decisiones en materia penal y de las actividades en las prisiones, los centros de detención y los establecimientos de rehabilitación por el trabajo.
6. Indagar sobre la responsabilidad jurídica de los funcionarios en caso de violación de los derechos democráticos, los derechos de la persona u otros derechos de los ciudadanos.

28. En China, el nombramiento de los jueces y de los fiscales obedece a reglas rigurosas y se realiza previo examen de sus méritos. Los jueces de los tribunales de las diversas instancias son los siguientes: presidente del tribunal, vicepresidente del tribunal, miembro de la comisión judicial, presidente de cámara, vicepresidente de cámara, juez y juez asesor. El ministerio público, en las diversas instancias, comprende los magistrados siguientes: fiscal general, abogado general, miembro de la comisión de la fiscalía, fiscal y fiscal asesor. El presidente del Tribunal Popular Supremo y el fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema son elegidos por la Asamblea Popular Nacional. Todos los demás magistrados de estas dos jurisdicciones son nombrados por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Los presidentes de los tribunales populares locales en los diversos niveles son elegidos por las asambleas populares locales de los mismos niveles. Los fiscales generales de las fiscalías populares locales en los diversos niveles son elegidos por las asambleas populares locales de los mismos niveles, y aprobados por el comité permanente de la asamblea popular del nivel inmediatamente superior a propuesta del fiscal general de la fiscalía de ese nivel. Los demás jueces y magistrados del ministerio público son designados por los comités permanentes de las asambleas populares en los diversos niveles.

29. Los servicios de seguridad pública son los órganos administrativos del Estado encargados de mantener el orden público y social. Como órganos del Estado chino, forman parte de la administración, pero están sometidos a la ley y poseen atribuciones determinadas en materia de justicia penal: en caso de proceso penal, están encargados de la encuesta y de la instrucción preliminar y proceden, de conformidad con la ley, a la detención, el registro de locales y otras medidas represivas de la acción penal. Los órganos de seguridad pública cumplen sus funciones judiciales de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y deben además respetar el reglamento sobre las detenciones, el reglamento sobre la administración de la seguridad pública y las penas, así como las reglas de conducta de los agentes de la fuerza pública y toda una serie de prescripciones legales y reglamentarias.

30. Dotados por la ley de atribuciones diferentes, los tribunales populares, las fiscalías populares y los órganos de seguridad pública cumplen sus funciones respectivas, durante el procedimiento penal, de conformidad con la ley, y no pueden sustituirse recíprocamente. El artículo 3 del Código de Procedimiento Penal dispone: "Los órganos de seguridad pública están encargados de la encuesta, la detención y la instrucción preliminar en los asuntos criminales. Las fiscalías populares están encargadas de pronunciarse sobre la legalidad y procedencia de las detenciones, de instruir el caso (en especial ordenando encuestas) e iniciar la acción pública. Los tribunales populares son los únicos que pueden juzgar". Además, el artículo 5 del mismo Código precisa: "Durante el procedimiento penal, los tribunales populares, las fiscalías populares y los órganos de seguridad pública se reparten los trabajos y asumen sus funciones respectivas, coordinan sus acciones y se controlan mutuamente para asegurar una aplicación exacta y eficaz de la ley".

31. Para garantizar la independencia de los tribunales y de las fiscalías, el artículo 126 de la Constitución dispone: "Los tribunales populares ejercen independientemente la autoridad judicial de acuerdo con lo previsto por la ley, sin admitir la injerencia de ningún organismo administrativo,

organización social o individuo". El artículo 131 de la Constitución dispone: "Las fiscalías populares ejercen independientemente el poder fiscalizador de acuerdo con lo previsto por la ley, sin admitir la injerencia de ningún organismo administrativo, organización social o individuo". Para asegurar la aplicación concreta de las disposiciones de la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica relativa a los tribunales populares dispone: "Los tribunales populares ejercen independientemente la autoridad judicial de acuerdo con lo previsto por la ley, sin admitir la injerencia de ningún organismo administrativo, organización social o individuo". Por otra parte, con arreglo a la Ley Orgánica relativa a las fiscalías populares, éstas ejercen independientemente el poder fiscalizador, aplican la ley por igual a todos los ciudadanos, no pueden conceder privilegio alguno y no admiten la injerencia de ningún órgano administrativo, organización social o individuo".

32. Los órganos de la administración judicial forman parte de la administración del Estado. Se trata de los servicios judiciales que dependen del Consejo de los Asuntos de Estado, así como de los departamentos, oficinas y otros órganos judiciales locales en los diferentes niveles. Ejercen los poderes de gestión administrativa en el ámbito judicial y están especialmente encargados de la gestión de las prisiones, de la rehabilitación de los delincuentes y de la reeducación por el trabajo; supervisan las actividades de los abogados y de los notarios; dirigen y administran las actividades de los auxiliares de justicia y las comisiones populares de arbitraje; administran la enseñanza del derecho en los institutos de ciencias políticas y jurídicas y los establecimientos de enseñanza superior; dirigen y administran la difusión de la formación jurídica, así como la publicación de periódicos, revistas y libros jurídicos.

D. El procedimiento penal

33. Con arreglo al Código de Procedimiento Penal, este procedimiento comprende cinco etapas: la incoación de la acción penal, la encuesta, el ejercicio de la acción pública, el juicio (que comprende los juicios en primera y en segunda instancia, el nuevo examen de las condenas a muerte y el control de las decisiones judiciales) y la ejecución de la sentencia.

34. Con arreglo al Código de Procedimiento Penal, los servicios de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares examinan sin dilación, en su esfera de competencia, los elementos relativos a las quejas, acusaciones o compariciones voluntarias e incoan una acción penal cuando estiman necesario determinar la responsabilidad penal por hechos criminales. Si están convencidos de que no hay hechos criminales o estiman que éstos son evidentemente de poca cuantía y no requieren una encuesta sobre la responsabilidad penal, no incoan acción penal alguna y notifican las razones al demandante. En caso de desacuerdo, el demandante puede pedir un nuevo examen.

35. Por encuesta se entiende el procedimiento seguido de conformidad con la ley por los servicios de seguridad pública (incluidos los órganos de seguridad del Estado) y las fiscalías populares para buscar pruebas en el marco de un asunto penal. Después de haber terminado su encuesta, el órgano de seguridad pública encargado de un asunto redacta una memoria en la que recomienda que se formalice un proceso o se renuncie a ello. Transmite esta memoria, con las

piezas y las pruebas correspondientes, a la fiscalía popular del mismo nivel para que ésta las examine y decida. Después de haber examinado la documentación que le ha transmitido el órgano de seguridad pública o de haber realizado su propia encuesta, la fiscalía popular puede decidir ejercitar una acción pública, dispensar de procesamiento al acusado, no realizar el procesamiento o archivar el caso.

36. Después de haber examinado un asunto penal que dé lugar a una acción pública, el tribunal popular, si los hechos criminales son claros y se han reunido pruebas, procede a una audiencia con miras a tomar una decisión. Cuando no cree necesario pronunciar una sanción penal, el tribunal puede pedir a la fiscalía popular que renuncie a sus actuaciones.

37. En caso de apelación o de recurso contra una sentencia en primera instancia, el tribunal popular de segunda instancia, después de visto el caso, decide como sigue, según las circunstancias: 1) Si en el juicio inicial no hay errores de hecho ni de derecho y si la pena es adecuada, rechaza la apelación o el recurso y confirma la sentencia inicial. 2) Si en el juicio inicial no hay errores de hecho pero sí errores de derecho o si la pena no es adecuada, revisa la sentencia. 3) Si los hechos evocados con ocasión del juicio inicial son oscuros, o si las pruebas reunidas son insuficientes, puede revisar la sentencia después de haber aclarado los hechos. Puede también anular la sentencia inicial y devolver el asunto al tribunal popular que lo había juzgado inicialmente, para que juzgue de nuevo.

38. Aparte de las penas capitales que pronuncie él mismo, el Tribunal Popular Supremo debe aprobar las penas capitales pronunciadas por otras jurisdicciones. Cuando un tribunal popular de categoría intermedia pronuncie en primera instancia una pena capital y el acusado no recurre, el asunto se somete a la aprobación del Tribunal Popular Supremo después de haber sido examinado por un tribunal popular de categoría superior. Cuando un tribunal popular de categoría superior está en desacuerdo con una condena a la pena capital, puede instruir el caso y juzgarlo o devolverlo para que sea objeto de un nuevo juicio. Todos los asuntos juzgados en primera instancia por un tribunal popular de categoría superior en los que se pronuncia la pena capital, cuando el acusado no recurre, y todos los asuntos en los que se pronuncia la pena capital en segunda instancia se someten a la aprobación del Tribunal Popular Supremo. En ciertos casos en que la ley prevé una condena a la pena capital, el Tribunal Popular Supremo, cuando ello es necesario, autoriza a los tribunales populares de categoría superior a ejercer el derecho de aprobación.

39. Las partes interesadas, las víctimas y los familiares u otros ciudadanos pueden, de conformidad con el procedimiento de control de las decisiones judiciales, presentar a los tribunales populares o a las fiscalías populares peticiones en relación con las sentencias o las decisiones ejecutorias, pero la ejecución de dichas sentencias o decisiones no puede suspenderse. De conformidad con el procedimiento de control de las decisiones judiciales, la Fiscalía Popular Suprema y las fiscalías populares en los niveles superiores están facultadas para revisar las sentencias y las decisiones ejecutorias, respectivamente, de los tribunales populares en los diversos niveles o de los tribunales populares en niveles inferiores, cuando observen en aquéllas errores manifiestos. Los presidentes de los tribunales populares

en los diversos niveles o la Fiscalía Popular Suprema o las fiscalías populares en los niveles superiores que observen errores manifiestos en las sentencias o las decisiones ejecutorias, respectivamente, de su tribunal, de los tribunales populares en los diversos niveles o de los tribunales populares en los niveles inferiores pueden, respectivamente, remitir el asunto al comité judicial, o bien instruirlo y juzgarlo, o bien ordenar un nuevo examen. Se constituye un nuevo órgano colegiado para juzgar de nuevo los asuntos, de conformidad con el procedimiento de control de las decisiones judiciales.

40. Los ciudadanos tienen derecho a presentar denuncias contra los servicios de seguridad pública o la fiscalía en caso de actos ilegales. Según las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal, los personales de los servicios judiciales, de las fiscalías y de los órganos de encuesta deben, de conformidad con los métodos legalmente prescritos, recoger diversos elementos de prueba, con miras a establecer la culpabilidad o la inocencia del acusado y la gravedad de su infracción. Está estrictamente prohibido arrancar confesiones mediante la tortura u obtener pruebas mediante amenazas, promesas u otros medios ilícitos. Se procede a una encuesta, con arreglo a la ley, sobre la responsabilidad penal de todo funcionario del Estado que obtiene confesiones mediante la tortura, lo que constituye un delito.

E. Categorías de penas previstas por la ley

41. Según la naturaleza del acto ilegal y de la responsabilidad jurídica, la ley prevé sanciones penales, sanciones civiles o sanciones administrativas.

42. Las sanciones penales son las penas aplicadas por los tribunales populares a los delincuentes penalmente responsables que hayan infringido el Código Penal. El Código Penal de China prevé dos categorías de penas: las penas principales y las penas accesorias. Las penas principales son: la sujeción a vigilancia (3 meses como mínimo y 2 años como máximo, no pudiendo exceder de 3 años la pena en caso de acumulación de infracciones); la detención (entre 15 días y 6 meses, no pudiendo exceder la pena de un año en caso de acumulación de infracciones); la prisión (entre 6 meses y 15 años, no pudiendo exceder la pena de 20 años en caso de acumulación de infracciones); la prisión perpetua; la pena de muerte (incluida la pena capital con suspensión de 2 años, en cuyo caso la suerte del condenado depende de su comportamiento durante esos 2 años de rehabilitación por el trabajo). Las penas accesorias son: multas, privación de derechos políticos y confiscación de bienes. Las penas accesorias pueden aplicarse también independientemente.

43. Las sanciones civiles son los castigos impuestos de conformidad con la ley por los tribunales populares a los autores civilmente responsables de infracciones graves a las reglas del derecho civil. Los principios generales del derecho civil de la República Popular de China prevén cinco categorías de sanciones civiles: la amonestación, el arrepentimiento formal, la incautación de bienes resultantes de actividades ilícitas y ganancias ilícitas, las multas y la detención.

44. Las sanciones administrativas son medidas de orden disciplinario tomadas de conformidad con la ley por determinados órganos administrativos contra ciudadanos, personas morales u otras organizaciones que hayan infringido leyes

o reglamentos administrativos, sin que ello constituya delito. La ley y el reglamento determinan el órgano administrativo capacitado para ejercer los poderes de orden disciplinario. Las sanciones administrativas aplicadas de conformidad con la ley por los órganos administrativos en caso de violación de reglas jurídicas administrativas consisten esencialmente en imponer al contraventor una obligación cualquiera, en restringir algunos de sus derechos o en privarle de ellos. Las principales sanciones administrativas son: 1) la censura, que es una sanción administrativa con valor de amonestación que repercute sobre su reputación (reprimenda, circular, etc.); 2) las sanciones sobre los bienes, que son privativas del derecho de propiedad (multas, confiscación de ganancias ilícitas, etc.); 3) las sanciones que restringen la libertad de acción o la suprimen (retirada del permiso de conducir, confiscación de la licencia profesional, etc.); 4) las sanciones personales que limitan la libertad personal (detención administrativa, reeducación por el trabajo, etc.).

45. La reeducación por el trabajo es una de las modalidades de la sanción administrativa. Se ejecuta con arreglo a la Decisión relativa a las cuestiones de reeducación por el trabajo, aprobada en 1957 por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, así como otras disposiciones legales. En todo el país, los gobiernos de las diversas provincias, regiones autónomas, municipios directamente subordinados al poder central y grandes o medianas ciudades establecen un comité de administración de la reeducación por el trabajo. Las fiscalías populares están encargadas de controlar las actividades realizadas a este respecto. Según las disposiciones pertinentes, la reeducación por el trabajo sólo se aplica a los menores de 16 años que, en las grandes o medianas ciudades, constituyen una amenaza para la seguridad pública y se niegan a enmendarse pese a múltiples advertencias, o han cometido ligeras infracciones que no dan lugar a sanciones penales, de conformidad con las condiciones fijadas por las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias. La ley prevé un procedimiento y un sistema de control rigurosos para evitar los errores de decisión en materia de reeducación por el trabajo.

46. Cuando el comité de administración de la reeducación por el trabajo ha pronunciado, con arreglo a las disposiciones relativas al personal de la reeducación por el trabajo, una pena de una duración comprendida entre uno y tres años, el condenado o su familia tienen derecho a conocer los motivos de la duración de esa pena. Si el condenado se niega a admitir la decisión, puede presentar una solicitud al comité de administración de la reeducación por el trabajo o, de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo, recurrir al tribunal popular. Si el establecimiento de reeducación por el trabajo estima que la persona condenada no cumple todas las condiciones requeridas o que la infracción debe ser objeto de una sentencia penal, puede pedir al comité de administración de la reeducación por el trabajo que reexamine su decisión.

47. Salvo la limitación de alguno de sus derechos por las medidas de reeducación de conformidad con la reglamentación en la materia, las personas sometidas a la reeducación por el trabajo continúan gozando de los derechos cívicos generales que les confieren la Constitución y la ley. Por ejemplo, no se ven privadas de sus derechos políticos y pueden ejercer su derecho de voto, con arreglo a la ley; gozan de libertad de correspondencia y del derecho a

licencias durante los días de fiesta y de descanso. Mientras cumplen su pena, pueden reunirse con sus parientes y les está permitido igualmente tomar licencias o vacaciones para visitar a su familia. En caso de buena conducta, la duración de la reeducación puede reducirse o darse por terminada anticipadamente de conformidad con la ley.

48. La reeducación por el trabajo difiere de la rehabilitación por el trabajo 1/. Esta es una sanción penal aplicada al delincuente condenado a una pena de prisión, sobre la base del procedimiento jurídico aplicable. Los órganos de seguridad pública proceden ante todo a una encuesta, el ministerio público inicia un proceso y el tribunal popular pronuncia una sentencia que es por último ejecutada por los servicios de rehabilitación por el trabajo. La reeducación por el trabajo es una medida administrativa de reeducación obligatoria aplicada a las personas que infringen la ley, cuando no procede investigar su responsabilidad penal. Las bases de la rehabilitación por el trabajo son el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Reglamento sobre la Rehabilitación por el Trabajo. La reeducación por el trabajo se apoya en una Decisión sobre esta materia y en las medidas experimentales tomadas al respecto, y está a cargo de los servicios de reeducación por el trabajo. La duración de la rehabilitación depende de la correspondiente sentencia del tribunal popular y de las disposiciones legales pertinentes, mientras la reeducación dura entre uno y tres años.

F. "Delitos contrarrevolucionarios" y "delitos políticos"

49. La noción de delito político no existe en China. Los "delitos contrarrevolucionarios" previstos en el Código Penal no son delitos políticos sino una categoría de infracciones penales. Los delitos de este tipo contra la seguridad del Estado se reprimen en todos los países. Según el Código Penal, los delitos contrarrevolucionarios son los actos que constituyen una amenaza para la República Popular de China cometidos con objeto de derribar el poder político de dictadura democrática popular y el sistema socialista. Esta definición precisa las dos condiciones esenciales para que haya un delito contrarrevolucionario: en el plano subjetivo, una finalidad contrarrevolucionaria; en el plano objetivo, un acto que constituya una amenaza para el Estado. Las dos condiciones deben cumplirse, siendo insuficiente una sola de ellas.

50. Los artículos 91 a 102 del Código Penal precisan de la siguiente manera los principales delitos contrarrevolucionarios: traición a la patria, complot para derribar el gobierno, instigación a la traición o a la rebelión, desertión y traición, espionaje, participación en servicios especiales, asistencia al enemigo, organización o dirección de un grupo contrarrevolucionario, participación activa en un grupo contrarrevolucionario, sabotaje contrarrevolucionario, incitación a la propaganda contrarrevolucionaria, etc. Pueden encontrarse en los Códigos Penales de muchos otros países disposiciones correspondientes para reprimir la mayor parte de los actos delictivos prohibidos por la ley en China. La única diferencia es la formulación de las infracciones.

1/ Llamada a veces "reforma por el trabajo" (NDT).

51. Los órganos judiciales que juzgan los asuntos contrarrevolucionarios observan una circunspección particular. Según el Código de Procedimiento Penal, los tribunales populares de categoría intermedia son competentes para conocer en primera instancia los asuntos contrarrevolucionarios. Cuando juzgan un asunto de este tipo, los tribunales populares siguen rigurosamente los principios y el procedimiento del Código procesal penal, se basan en hechos objetivos y se remiten a la ley para dictar una sentencia objetiva e imparcial. Durante el proceso, como en cualquier otro proceso penal, el acusado goza de todos los derechos previstos por el Código de Procedimiento Penal, incluido el derecho de recusar a un magistrado del tribunal o de la fiscalía o a un investigador, el derecho de ser defendido, de interponer recurso, etc.

52. Igual que las penas aplicadas a otros delincuentes, las penas impuestas a los contrarrevolucionarios dependen de la realidad, de la naturaleza y de las circunstancias de los delitos, así como de las disposiciones del Código Penal relativas a las diferentes infracciones contra la sociedad. Cuando purgan su pena, los autores de los delitos contrarrevolucionarios son tratados por la ley como los demás delincuentes y no son objeto de medidas discriminatorias ni disciplinarias suplementarias. Además, la duración de su trabajo puede ser menor, ya que invierten más tiempo en estudiar, leer obras apropiadas, periódicos, asistir a cursos, participar en reuniones y otras actividades, para que puedan tomar conciencia de los perjuicios que sus actos criminales han causado a la vida cotidiana y al orden en el trabajo del Estado y del pueblo y puedan arrepentirse. Como los demás delincuentes, los autores de delitos contrarrevolucionarios participan en el trabajo durante su detención, lo que no constituye una violación de los principios de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Por otra parte, en cuanto trabajadores, benefician de un trato apropiado de protección profesional y sanitaria. La seguridad, la higiene, las condiciones de ventilación e iluminación, etc. de los establecimientos de rehabilitación por el trabajo son objeto de normas precisas dictadas por el Estado. Según las estadísticas, a fines de 1991 había en China 4.329 autores de delitos contrarrevolucionarios, es decir, el 3,58 por mil del conjunto de la población penal. Según las leyes y los reglamentos de la administración penitenciaria, los condenados contrarrevolucionarios cumplen sus penas en prisiones, estando repartidos todos ellos entre diferentes prisiones.

G. El sistema de control de la aplicación de las leyes

53. El control de la aplicación de las leyes corresponde a los órganos del poder del Estado, a los órganos judiciales, a los órganos administrativos y a la sociedad.

54. El control ejercido por los órganos del poder del Estado abarca el control de la aplicación de la Constitución y de las leyes por la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. Las asambleas populares locales en los diferentes niveles y los comités permanentes de éstas en los distritos y en niveles superiores cuidan de la observancia y la aplicación de la Constitución, de las leyes, de los reglamentos administrativos y de los reglamentos de carácter local en su respectiva circunscripción administrativa. El control de la aplicación de la Constitución y de las leyes comprende dos aspectos: primero, examinar y controlar la conformidad de las

leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de carácter local y otros reglamentos con los principios de la Constitución y las disposiciones pertinentes; segundo, verificar la constitucionalidad de las actividades de todos los órganos del Estado, de los grupos sociales y de los ciudadanos. La Asamblea Popular Nacional tiene el poder de modificar o suspender toda ley o todo reglamento que sean contrarios a la Constitución, incluidas las decisiones inadecuadas tomadas por su Comité Permanente. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional está facultado para anular los reglamentos administrativos, las decisiones y las órdenes emanados del Consejo de los Asuntos de Estado que fueren contrarios a la Constitución o a las leyes, así como los reglamentos y las decisiones de carácter local procedentes de órganos del poder de las provincias, de las regiones autónomas y de los municipios directamente subordinados a la autoridad central que fueren contrarios a la Constitución, a las leyes o a los reglamentos administrativos. Las asambleas populares locales de los distritos y de niveles superiores están facultadas para anular las decisiones y las órdenes improcedentes dictadas por los gobiernos populares en el mismo nivel, así como las decisiones improcedentes dictadas por las asambleas populares en el nivel inmediatamente inferior.

55. El control por los órganos judiciales es de dos tipos: el control de las sentencias y el control de la fiscalía. El control de las sentencias judiciales se realiza de la siguiente manera: si el Tribunal Popular Supremo encuentra errores manifiestos en las sentencias o las decisiones ejecutorias de los tribunales populares de los diversos niveles o si los tribunales populares de categoría superior encuentran errores manifiestos en las sentencias o las decisiones ejecutorias de los tribunales populares de categoría inferior, están facultados para instruir el caso y juzgarlo o devolverlo a un tribunal de categoría inferior para que lo juzgue de nuevo. Si los presidentes de los tribunales populares de los diversos niveles encuentran errores manifiestos de hecho o de derecho en las sentencias o las decisiones ejecutorias de su propio tribunal, están facultados para remitir el caso al Comité Judicial para que éste decida. Los tribunales populares de categoría superior supervisan las actividades judiciales de los tribunales populares de categoría inferior.

56. Como se ha explicado antes de manera bastante detallada, las fiscalías populares controlan la aplicación de las leyes ejerciendo su poder de incoar un proceso. Conviene añadir, no obstante, que no desempeñan este papel en todos los casos de aplicación de las leyes, sino únicamente en los determinados por la ley. El control de las fiscalías populares en los diferentes niveles sobre los órganos del Estado y sus funcionarios se limita en general al poder de incoar un proceso para determinar la responsabilidad penal en caso de infracción grave de la ley. Cuando se trata de una infracción menor y el acto ilícito no constituye un delito, la competencia incumbe a otro órgano.

57. El control de los órganos administrativos es el ejercido por éstos en los niveles superiores sobre la legalidad de la aplicación y la observancia de las leyes y los reglamentos por los órganos administrativos en los niveles inferiores, así como el ejercido por los órganos administrativos sobre la legalidad de la aplicación y la observancia de las leyes y reglamentos por las empresas, los establecimientos y los ciudadanos. De conformidad con la Constitución, el Consejo de los Asuntos de Estado está facultado para

modificar o anular las órdenes, las instrucciones y los reglamentos improcedentes dictados por los ministerios y las comisiones. Los gobiernos populares locales de los distritos y de niveles superiores están facultados para modificar o anular las decisiones improcedentes de los organismos que les están subordinados y de los gobiernos populares de niveles inferiores. El órgano administrativo competente está facultado para imponer las sanciones administrativas necesarias a los trabajadores, las empresas y los establecimientos y ciudadanos que infrinjan las leyes y los reglamentos del derecho administrativo.

58. El Estado ha creado además mecanismos especiales de inspección encargados de controlar la administración de manera estricta, eficaz y sin demoras. Se trata de organismos de control del Gobierno que supervisan y examinan la aplicación de las leyes, los reglamentos, las decisiones y las instrucciones por los órganos administrativos del Estado y sus funcionarios. Reciben las acusaciones y las denuncias presentadas por infracciones a la ley y a los reglamentos cometidas por los órganos administrativos antedichos y sus funcionarios, y realizan al respecto una encuesta de conformidad con la ley. Según los resultados de esta encuesta, presentan sugerencias al órgano administrativo competente o bien imponen sanciones administrativas (amonestación, censura, degradación, revocación, etc.). Los servicios de inspección difieren de los tribunales administrativos instituidos por los tribunales populares en aplicación del Código de Procedimiento Administrativo. Los tribunales administrativos entienden especialmente de los asuntos relativos al procedimiento administrativo suscitados por ciudadanos, personas morales u otras organizaciones que estiman que sus derechos e intereses legítimos han sido vulnerados por tal o cual acto de órganos administrativos o de sus funcionarios.

59. El control por la sociedad consiste en el control en que participan activamente, en formas diversas y en vasta escala, las masas populares, respecto a la ejecución de las leyes y la gestión de los asuntos públicos por los funcionarios. Abarca las situaciones siguientes:

1. El control por las organizaciones sociales: la Conferencia Consultiva Política del Pueblo supervisa los asuntos del Estado y la aplicación de la Constitución y de las leyes mediante consultas, debates, críticas y propuestas. Los diputados en las asambleas populares de los diversos niveles y los miembros de la Conferencia inspeccionan de vez en cuando las prisiones y los establecimientos de rehabilitación por el trabajo para examinar las condiciones de aplicación de la ley. Así, en 1991, más de 30 miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y de la Conferencia Consultiva Política de la Ciudad de Beijing realizaron cuatro inspecciones sucesivas de la prisión N° 1 de Beijing para examinar las condiciones en que se aplica allí la ley.
2. El control por la opinión pública: en los diarios, en la radio o con ayuda de otros medios de comunicación, las masas pueden denunciar diversas infracciones a las leyes y a los reglamentos, y apoyar y vigilar a los órganos judiciales que sancionan de conformidad con la ley los diversos actos criminales.

3. El control ejercido por las masas: se trata del control de la legalidad ejercido directamente por las masas populares, en especial sobre la legislación, la aplicación de las leyes y la justicia. El Estado garantiza y facilita esta supervisión directa estableciendo, por ejemplo, centros de acogida para los visitantes, oficinas para el correo y visitas de las masas, líneas telefónicas especiales, etc.

H. Los tratados internacionales y el derecho interno

60. China ha reconocido y respetado siempre la Carta de las Naciones Unidas, así como la finalidad y el principio de la promoción de los derechos humanos. Aprecia y sostiene los esfuerzos de las Naciones Unidas para fomentar el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Ha participado activamente en los trabajos de redacción y elaboración de los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Desde 1980, ha firmado y ratificado sucesivamente una serie de convenciones internacionales en el campo de los derechos humanos y se ha adherido a ellas. Citemos en especial la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, etc.

61. En el sistema jurídico chino, los tratados y los principales acuerdos internacionales concertados por China o a los que ésta ha adherido deben ser ratificados por los órganos supremos del poder. Una vez ratificados entran en vigor en China, asumiendo entonces el país las obligaciones correspondientes. De manera general, cuando ciertas disposiciones de un instrumento internacional concertado por China o al que ésta se ha adherido no son compatibles con el derecho interno, es necesario proceder a una armonización. Las disposiciones del tratado internacional prevalecen sobre el derecho interno, salvo en los casos en que China haya expresado reservas en el momento de la ratificación o la adhesión. La aplicación en China de la Convención contra la Tortura sigue este principio.

62. China considera que la tortura constituye un acto criminal grave. En primer lugar, los actos de tortura violan las disposiciones de los artículos 37 a 41 de la Constitución de la República Popular de China relativos a la inviolabilidad de los derechos de la persona y de los ciudadanos. Según la Constitución, ningún ciudadano puede ser detenido sin la autorización o decisión de la fiscalía popular o la decisión de un tribunal popular y la detención no puede ser ejecutada sino por los organismos de seguridad pública. sEstán prohibidos cualquier arresto ilegal y cualquier otro medio ilegal de privar a los ciudadanos de su libertad personal o restringirla. La dignidad personal de los ciudadanos es inviolable. Se prohíbe ofenderlos, difamarlos o hacer acusaciones infundadas contra ellos por cualquier medio. Además, los actos de tortura tal como se definen en el artículo 1 de la Convención son considerados por la Constitución y las demás leyes pertinentes como actos criminales graves y, en cuanto a tales, están prohibidos y son punibles.

63. Como el texto de la Convención no precisa las sanciones penales aplicables en caso de acto criminal de tortura, los órganos judiciales que incoan los procedimientos y deciden en los casos de tortura se apoyan principalmente en las disposiciones de derecho interno para pronunciarse sobre la culpabilidad y determinar las penas. Aunque no exista todavía en el derecho chino una definición particular del término "tortura", ello no es obstáculo para que China aplique en la práctica las disposiciones y las prescripciones de la Convención.

Parte II

APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCION

Artículo 2

64. Al correr de los años, y especialmente desde su adhesión a la Convención, China ha adoptado medidas eficaces en los ámbitos legislativo, judicial, administrativo y otros, con miras a prohibir terminantemente los actos de tortura y garantizar la inviolabilidad de los derechos de la persona y de los derechos democráticos de los ciudadanos.

65. La Constitución y las leyes chinas contienen disposiciones explícitas sobre la protección de los derechos de la persona y del ciudadano. Así, en los artículos 37 a 41 de la Constitución figuran las disposiciones relativas a la inviolabilidad de los derechos de la persona y del ciudadano. El artículo 6 de la Ley Orgánica relativa a las fiscalías populares de la República Popular de China dispone asimismo lo siguiente: "Las fiscalías populares, en cumplimiento de la ley, protegerán el derecho del ciudadano a formular reclamaciones contra los funcionarios que quebranten la ley e investigarán la responsabilidad jurídica de todos aquellos que lesionaren los derechos de la persona y otros derechos, en especial los democráticos". Basándose en esta disposición, el Estado creó un servicio de asuntos disciplinarios en el marco de las fiscalías populares de los distintos niveles, encargado de investigar las violaciones de los derechos de los ciudadanos cometidas por funcionarios.

66. A fin de proteger a los ciudadanos contra todo ataque ilegal a su integridad personal y de impedir cualquier acto de tortura, en numerosas leyes el Estado estipula categóricamente que ningún ciudadano podrá ser privado de libertad sin la aprobación o decisión de un fiscal popular o sin decisión de un tribunal popular, y que el arresto debe ser realizado por los servicios de seguridad pública. Para garantizar el correcto cumplimiento de esas medidas coercitivas y no perjudicar a inocentes, la Constitución y la ley confieren a las fiscalías la facultad de examinar y aprobar los arrestos. Los órganos de seguridad pública tienen la facultad legal de detener a las personas. Cuando un organismo de seguridad pública considera necesario disponer el arresto formal de una persona que ha sido detenida, deberá presentar al fiscal popular, dentro de los tres días siguientes a la detención, una solicitud de examen y aprobación. El fiscal popular decidirá si aprueba o no el arresto formal dentro de los tres días siguientes a la recepción de dicha solicitud. Si el fiscal popular no aprueba el arresto, el órgano de seguridad pública deberá poner en libertad a la persona en cuestión tan pronto como reciba la notificación de la decisión del fiscal, entregándole un certificado de liberación. Si el órgano de seguridad pública o el fiscal popular no actúan de acuerdo con esas disposiciones, la persona detenida y sus familiares tendrán derecho a exigir su liberación, y el organismo de seguridad pública o el fiscal popular deberán ponerla inmediatamente en libertad.

67. Para evitar las agresiones físicas o verbales, los castigos corporales y los malos tratos, así como eliminar hasta donde sea posible los actos de tortura, los servicios encargados de la seguridad pública verifican no sólo los métodos y procedimientos de trabajo empleados por sus agentes, sino

también si se han arrancado confesiones mediante actos de tortura. Los órganos de seguridad pública han creado en todos los niveles servicios de investigación y centros de información encargados de la disciplina, la vigilancia y el respeto de la legalidad, y que entiendan en las reclamaciones y denuncias relativas a actos de tortura o vías de hecho, y llevan a cabo investigaciones minuciosas en los casos de confesiones arrancadas mediante torturas y de otras violaciones de los derechos de la persona y del ciudadano.

68. A fin de enseñar a los ciudadanos a proteger legalmente sus derechos e intereses y para desarrollar su conocimiento del sistema jurídico, el Gobierno chino atribuye una gran importancia a la divulgación de los rudimentos del derecho. En 1985 el Gobierno decidió iniciar en todo el país un primer programa de estudio de los rudimentos jurídicos, de cinco años de duración y de gran envergadura, basado en los textos de la Constitución, del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, de las normas generales de derecho civil, del Código de Procedimiento Civil y de otras leyes fundamentales. Según las estadísticas, a finales de 1990, 700 millones de ciudadanos de los 750 millones incluidos en el programa habían recibido una formación básica en la materia. Por otra parte, para consolidar y desarrollar el trabajo efectuado durante esos primeros cinco años, el Gobierno chino decidió prorrogar el programa cinco años más a partir de 1991.

69. Los métodos empleados para llevar a buen término esa formación jurídica son numerosos y diversos. En primer lugar, desde el nivel central hasta los niveles locales, los diferentes servicios gubernamentales han creado organismos encargados de la formación jurídica y contratado a los encargados de impartir dicha formación. Esta reviste diversas formas: informes, conferencias itinerantes, exposiciones fotográficas, representaciones artísticas y literarias, programas radiofónicos, cinematográficos y televisivos. Se han creado cursos de formación jurídica en los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria. Cada hogar recibe la visita de miembros de las organizaciones de barrio, que discuten esos temas con las personas de edad y los enfermos.

70. En cuanto al contenido, el programa de formación no insiste sólo en el derecho interno, sino que lleva asimismo a conocimiento de las personas interesadas los principales instrumentos jurídicos adoptados por las Naciones Unidas, y en particular la Convención contra la Tortura. Se ha pedido a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y especialmente al personal penitenciario, que estudie atentamente y conozca las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como los diversos documentos relativos a los derechos humanos -de carácter orientador u obligatorio- adoptados por las reuniones pertinentes de las Naciones Unidas.

71. En China las órdenes de un superior o de un órgano administrativo no pueden invocarse para justificar los actos de tortura. Los actos penales, entre los que se cuenta la tortura, están castigados por el Código Penal y las disposiciones legales pertinentes. Las órdenes de un superior o de un órgano administrativo no permiten de ninguna manera escapar al rigor de la ley.

Artículo 3

72. Según la Constitución y las leyes pertinentes, el Estado protege los derechos e intereses legítimos de los extranjeros que viven en territorio chino. Su libertad individual es inviolable. Ningún extranjero puede ser privado de su libertad sin la aprobación o decisión de un fiscal popular o sin la decisión de un tribunal popular, y el arresto debe ser realizado por los servicios de seguridad pública o de seguridad del Estado. Previa aprobación por el Gobierno chino, todo extranjero que pide refugio por razones políticas obtiene el derecho de asilo. Por supuesto que los extranjeros que viven en territorio chino están obligados a observar las leyes chinas y las disposiciones vigentes. En caso de infracción, la autoridad administrativa competente aplica una sanción administrativa, que dependerá de la naturaleza de la infracción o del acto penal, por ejemplo, una limitación del derecho de salida o, por el contrario, una expulsión del país. Un tribunal popular puede asimismo pronunciar una condena, simple o calificada con una medida de expulsión.

73. Como consecuencia de la aplicación de la política de reformas y de apertura, China coopera cada vez más con otros países en la esfera judicial. Si bien aún no ha elaborado ninguna ley o reglamento de extradición, China mantiene con algunos países, sobre todo con los limítrofes, una colaboración en materia de justicia penal que prevé, por ejemplo, la extradición o devolución de los delincuentes. En la práctica, el auxilio judicial mutuo entre China y los demás países en materia de extradición o devolución de delincuentes presupone generalmente la reciprocidad. Por otra parte, para decidir sobre la oportunidad de una medida de extradición o devolución, los órganos judiciales examinan atentamente su compatibilidad con los principios generales del derecho internacional y las obligaciones internacionales contraídas por China. Si se considera que una medida tal no se ajusta a esos principios y obligaciones, se enjuicia a la persona cuyo delito ha sido objeto de tal solicitud y se dicta sentencia en virtud de las leyes chinas aplicables en la materia.

Artículo 4

74. Por lo que se refiere a las penas aplicables a los delitos de tortura, los artículos 136, 143, 144 y 189 del Código Penal de la República Popular de China castigan, respectivamente, la obtención de confesiones mediante torturas, la detención ilegal, la vigilancia ilegal, los castigos corporales y otros malos tratos infligidos por los miembros de la administración penitenciaria. El Código de Procedimiento Penal de la República Popular de China, el Reglamento de la República Popular de China sobre la Administración de la Seguridad Pública y las Penas, el Reglamento de la República Popular China sobre el Arresto y la Detención, así como otros textos, precisan la manera de prevenir y prohibir la tortura durante el proceso judicial. El Código de Procedimiento Administrativo, promulgado en 1990, garantiza vías de recurso judicial directas y eficaces a todo ciudadano que solicite protección jurídica como consecuencia de la violación de sus derechos por parte de un órgano del Estado o de sus funcionarios.

75. La ley prohíbe formalmente los castigos corporales y los órganos judiciales sancionan, proporcionalmente a la gravedad de los hechos, a los funcionarios públicos que recurren a esos castigos, manifiestos o encubiertos,

infligiéndolos a los acusados o a cualquier persona que purga una pena de prisión, con miras a arrancarles confesiones. Si el acto de tortura no produce heridas ni invalidez, la pena de prisión o reclusión será de tres años como máximo. En caso de heridas o de invalidez, el torturador será acusado de producir lesiones e incurrirá en una pena más grave, de tres a siete años de reclusión. En caso de fallecimiento, la pena de prisión no podrá ser inferior a siete años e incluso podrá ser de reclusión perpetua.

76. El termino "acusado", empleado en el párrafo anterior, designa a cualquier persona de quien se supone que ha cometido un delito o a cualquier acusado en el fuero penal que sea objeto de investigación o enjuiciamiento, o esté sometido a decisión judicial. La expresión "castigo corporal" designa el empleo de cualquier método o instrumento de tortura que produzca en una persona sufrimientos corporales, musculares u orgánicos (atarla, colgarla para golpearla, golpearla con los puños o los pies, etc.). La expresión "castigo corporal encubierto" designa los suplicios físicos o mentales, como la posición erecta prolongada, la exposición al frío o al hambre, o la privación del sueño.

77. La expresión "tortura mental" no existe en el derecho chino. Si se infligen a una persona sufrimientos mentales mediante un acto de tortura, la justicia sanciona a sus autores basándose en las penas previstas para los casos de tortura física que produzcan lesiones orgánicas. Determinados tormentos calificados de "castigos corporales encubiertos", como la exposición obligada al frío o la privación prolongada de alimentos o del sueño, son considerados por el Código Penal como delitos y, por consiguiente, punibles.

78. El apresamiento y la detención ilegales, o cualquier otro medio coercitivo por el que se prive a una persona de su libertad individual, se asimilan al "delito de detención ilegal" previsto por el Código Penal. El artículo 143 de dicho Código dispone que está terminantemente prohibido detener ilegalmente a una persona o privarla ilegalmente de su libertad individual por cualquier otro medio. El infractor será condenado a una pena de prisión o reclusión no superior a tres años, o a la privación de sus derechos políticos. Si hubiere habido agresión física o actos humillantes, el infractor será castigado con una pena más grave. Todo el que perpetrare el delito mencionado en el párrafo precedente y ocasionare graves lesiones corporales, incurrirá en una pena de prisión de tres a diez años. Si las lesiones acarreasen la muerte, se le aplicará una pena de prisión no inferior a siete años. Es necesario precisar que la expresión "detención ilegal", en el sentido de la ley, reviste dos significados distintos: por una parte, la detención de una persona por un ciudadano no autorizado a hacerlo, y, por la otra, la detención de una persona por un funcionario habilitado por la ley, pero que no ha solicitado a los servicios legales la correspondiente autorización, o no respeta el procedimiento legal, abusando de sus atribuciones y violando así la libertad individual del detenido.

79. El Código Penal dispone que toda persona que someta ilegalmente a otra a vigilancia pública o a un registro corporal, allane ilegalmente su domicilio o se introduzca ilegalmente en éste será condenada a una pena de prisión o reclusión no superior a tres años.

80. La pena por un delito de tortura será determinada por el tribunal popular conforme a los principios fijados por la ley penal. El artículo 57 del Código Penal dispone lo siguiente: "La pena aplicable a un delincuente se determinará teniendo en cuenta la realidad y la naturaleza del delito, así como las circunstancias en que ha sido cometido y su grado de nocividad para la sociedad, conforme a las disposiciones pertinentes del presente Código".

81. En materia penal, una serie de disposiciones prevén que se aplicarán sanciones penales más graves al autor principal del delito (artículo 23 del Código Penal), al instigador (artículo 26 del Código Penal), al reincidente (artículo 61 del Código Penal), al funcionario que arranque confesiones infligiendo torturas y a toda persona que provoque lesiones o cause una invalidez a un tercero como consecuencia de un castigo corporal (artículo 136 del Código Penal), o cuando la detención ilegal de una persona o la privación de su libertad individual por cualquier otro medio vaya acompañada de agresiones físicas o actos humillantes (artículo 143 del Código Penal).

Artículo 5

82. El artículo 3 del Código Penal, que enuncia las reglas relativas al ejercicio de la competencia para entender en los delitos previstos en el artículo 4 de la Convención, dispone lo siguiente: "El presente Código se aplicará a toda persona que cometa un delito en el territorio de la República Popular de China, a menos que sea aplicable al caso una disposición jurídica especial. El presente Código se aplicará asimismo a toda persona que cometa un delito a bordo de un navío o una aeronave de la República Popular de China. Un delito se considerará cometido en territorio de la República Popular de China si el acto en sí o sus consecuencias han tenido lugar en dicho territorio".

83. El término "territorio" empleado en el artículo 3 del Código Penal designa el conjunto de regiones situadas dentro de las fronteras de la República Popular China. El término "delito" designa todo acto penal o consecuencia de dicho acto que se produzca en el territorio de la República Popular de China. La expresión "a menos que sea aplicable al caso una disposición jurídica especial" se refiere ante todo a las reglas particulares aplicables a los súbditos extranjeros que gozan de privilegios e inmunidades diplomáticos. Así, el artículo 8 del Código Penal dispone QUE "la responsabilidad penal de los extranjeros que gozan de privilegios e inmunidades diplomáticos se establecerá por vía diplomática". La misma expresión se refiere además a las reglas particulares aplicables en los territorios de las minorías nacionales. Así, el artículo 80 del Código Penal prevé que "cuando en las regiones de autonomía nacional las disposiciones del presente Código no puedan aplicarse íntegramente, los órganos de los poderes del Estado de las regiones autónomas o de las provincias podrán elaborar disposiciones nuevas o complementarias tomando en cuenta a la vez las particularidades políticas, económicas y culturales de las minorías nacionales locales y los principios fundamentalees del presente Código; dichas disposiciones entrarán en vigor después de haber sido sometidas al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y aprobadas por éste". Por último, la expresión en cuestión se refiere a las distintas disposiciones que figuran en las leyes promulgadas por el Estado después de la entrada en vigor del Código Penal.

84. En su 21º período de sesiones, celebrado en 1987, el Comité Permanente de la VI Asamblea Popular Nacional decidió que "la República Popular de China, en el marco de las obligaciones que le incumben en virtud de los instrumentos internacionales que ha concluido o a los que se ha adherido, ejerce su competencia penal en los casos de los delitos a que se refieren esos instrumentos".

Artículo 6

85. En China son los órganos de seguridad pública los que proceden a detener y arrestar a los acusados. El artículo 43 del Código de Procedimiento Penal prevé que todo órgano de seguridad pública que detenga a una persona deberá presentar una orden de detención. El agente de seguridad pública tiene la obligación legal de informar del contenido de la orden a la persona detenida. La orden deberá llevar la fecha del primer día de detención y llevar la firma o la huella dactilar del detenido. Para evitar errores, la ley dispone que dentro de las 24 horas que siguen a la detención, deberá efectuarse un interrogatorio. En caso de error, se deberá poner inmediatamente en libertad al acusado y entregársele una orden de liberación. A fin de informar sobre la situación del interesado a sus familiares y a su unidad de trabajo, se deberá notificar a ambos dentro de las 24 horas los motivos y el lugar de la detención, salvo en los casos en que dicha notificación entorpezca la investigación o no pueda efectuarse.

86. La expresión "entorpezca la investigación", del párrafo precedente, se refiere al caso en que el delito ha sido cometido por varias personas o por un grupo constituido, y los órganos de seguridad pública no detienen más que a una o algunas personas y aún no han efectuado ninguna investigación sobre los cómplices. En ese caso será menester impedir que éstos huyan, se oculten, o destruyan o falsifiquen elementos de prueba al tener conocimiento del comienzo de los interrogatorios. La expresión "no pueda efectuarse" se refiere a los delitos cometidos por un vagabundo que se niega a revelar su verdadero nombre y su dirección exacta, en cuyo caso no se puede informar a nadie, o a los casos de desastres naturales o cualquier otro caso de fuerza mayor. Cuando no se haya efectuado la notificación dentro de las 24 horas, los agentes de seguridad pública que hayan llevado a cabo la detención consignarán el hecho en los documentos pertinentes, conforme al reglamento y, tan pronto como se hayan levantado los obstáculos mencionados, informarán inmediatamente a los familiares o a la unidad de trabajo del interesado sobre su situación.

87. El Código de Procedimiento Penal dispone que todo órgano de seguridad pública que proceda a arrestar a una persona deberá presentar una orden de ingreso en prisión. Dentro de las 24 horas siguientes al ingreso en prisión de la persona se informará a sus familiares o a la unidad a la que pertenece sobre los motivos del ingreso en prisión y el lugar en que se encuentra, salvo cuando dicha notificación pueda perjudicar la investigación o no pueda efectuarse. Por otra parte, si la persona detenida o arrestada es un ciudadano extranjero, en la práctica el órgano de seguridad pública informa de esa situación, generalmente por vía diplomática, a la embajada o servicio consular del país correspondiente.

88. Según lo establecido por la ley, la detención en espera de juicio no podrá exceder de dos meses. Si el caso es complejo y no puede resolverse dentro del plazo fijado, el período podrá prorrogarse un mes más con la

aprobación de la fiscalía popular superior. En los casos de gran complejidad o importancia excepcional, la Fiscalía Popular Suprema podrá pedir al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional que apruebe un aplazamiento del juicio.

89. En primera instancia, el tribunal popular debe pronunciarse dentro de un plazo de un mes, que puede prolongarse a un mes y medio como máximo, a partir de la incoación del proceso por la fiscalía popular. En segunda instancia, el tribunal popular pronuncia un fallo dentro de un plazo de un mes, que podrá prolongarse a un mes y medio como máximo, a partir de la fecha de interposición de una apelación o un recurso.

Artículo 7

90. El principio definido por la Convención, según el cual los actos de tortura constitutivos de delito pueden dar lugar ya sea a una medida de extradición o a una acción penal, se ajusta al principio establecido en la práctica por la justicia china para entender en los actos penales imputados a ciudadanos extranjeros. Los órganos judiciales chinos que juzgan un caso penal en que está implicado un ciudadano extranjero se fundan asimismo en las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y aplican el mismo procedimiento que para las demás infracciones penales de derecho común.

91. Durante el proceso penal todo acusado goza de los derechos que le reconoce la ley, como el derecho a la defensa, el derecho a la dignidad y a la protección de la persona, el derecho a la inviolabilidad de los bienes legítimos, el derecho a formular quejas, el derecho a presentar denuncias, y todos los demás derechos del ciudadano previstos por la ley. El acusado puede encargarse él mismo de su defensa, pero también puede otorgar un mandato para hacerlo a un abogado, a un familiar o a cualquier otro ciudadano. Cuando un fiscal sostiene una acción pública ante el tribunal y el acusado no ha otorgado ningún mandato para asegurar su defensa, la fiscalía popular puede asignarle un defensor. Durante el proceso, el acusado puede recusar a su defensor y otorgar mandato a otro. Tras decidir la incoación de un proceso, el tribunal popular comunica al acusado, a más tardar siete días antes de que comience la vista, una copia de la acusación, para que el acusado tome conocimiento del delito que se le imputa y del motivo de la acusación, y tenga tiempo suficiente para preparar su defensa y ponerse en contacto con su defensor.

92. El acusado que no esté de acuerdo con la sentencia o decisión pronunciada en primera instancia por el tribunal popular puede interponer un recurso de apelación ante el tribunal popular del nivel superior. Este no podrá agravar la pena impuesta. En caso de no estar de acuerdo con una sentencia o decisión ejecutoria, el acusado podrá presentar un escrito al tribunal popular o al fiscal popular competente. En 1991 los tribunales populares tramitaron más de 40.000 solicitudes de ese tipo.

93. En cualquier circunstancia el delincuente tiene derecho a la dignidad y a la protección de su persona. Puede formular quejas contra el personal penitenciario que le haya arrancado confesiones mediante actos de tortura, infligido castigos corporales u otros malos tratos, o cometido otros actos ilegales, y presentar una denuncia ante fiscalía popular, el tribunal popular,

el gobierno popular u otros órganos. Si no ha sido privado de sus derechos políticos, ejercerá su derecho de voto conforme a la ley. En la cárcel o el campo de rehabilitación por el trabajo en que esté internado, tendrá derecho a formular propuestas de racionalización en materia de administración, educación, trabajo productivo, cultura y esparcimiento e higiene.

94. Los reclusos tienen derecho a una vida normal. El Estado les garantiza alimentos, indumentaria, alojamiento y demás condiciones materiales de vida. Cada recluso dispone de una superficie mínima de 5 m², en la medida de lo posible, su celda debe ser sólida y limpia, y tener calefacción y ventilación. Según las estadísticas, en 1990 cada recluso consumió por mes un promedio de 22,75 kg de cereales, 20 a 25 kg de verduras y una cantidad suficiente de carne de cerdo, de vaca y de cordero, así como de pescado, aves, huevos y leguminosas. Cada recluso disponía diariamente de una ración alimentaria de 2.952 calorías y sus gastos de subsistencia se elevaban, en el conjunto del país, a un promedio de alrededor de 650 yuan, es decir, que tenía un nivel de vida parecido al de los demás habitantes.

95. Los reclusos tienen derecho a la salud. Gozan de atención médica gratuita, exámenes médicos anuales y tratamientos médicos apropiados en caso de enfermedad. En caso de enfermedad grave, la ley permite poner a un preso en libertad bajo fianza por razones médicas. Los reclusos que se beneficiaron de ese derecho ascendieron al 1,91% de la población carcelaria en 1990 y al 1,94% en 1991. Las reclusas embarazadas o que amamantan a un hijo siguen tratamientos fuera de la cárcel. Cuando un recluso contrae una enfermedad difícil de tratar, la cárcel o el campo de rehabilitación por el trabajo recurren a un especialista o envían al recluso en consulta a un hospital civil. Actualmente el sistema de rehabilitación por el trabajo está dotado de una red de atención médica e higiene, que consta de tres niveles: los hospitales centrales, dependientes de las oficinas provinciales de rehabilitación por el trabajo, los hospitales de los distintos campos de rehabilitación por el trabajo y de las cárceles, y las enfermerías del nivel básico, o sea, un total de 2.944 establecimientos sanitarios. El número de médicos por cada mil reclusos es de 3,54 y el de camas de hospital de 14,8, cifras superiores a la media nacional.

96. Los reclusos tienen derecho a recibir una formación y los órganos encargados de la rehabilitación por el trabajo crean las condiciones necesarias para tal fin. Según su nivel de instrucción, los reclusos pueden seguir los cursos regulares de la enseñanza primaria, del primer ciclo de la enseñanza secundaria y, cuando las condiciones lo permiten, del segundo ciclo de la enseñanza secundaria, e inclusive cursos de nivel más elevado. Además, pueden recibir una formación profesional que les permita ganarse la vida tras su reintegración a la sociedad civil. Pueden leer libros y periódicos, escuchar la radio, mirar la televisión, informarse acerca de los grandes temas nacionales e internacionales y mantener contactos regulares con la sociedad exterior.

97. En China la enseñanza técnica constituye una de las prioridades de la reforma de la enseñanza en las cárceles. En 1991 más de 560.000 delincuentes participaron en diferentes cursillos técnicos, cifra equivalente al 83,18% del número de reclusos que recibían una enseñanza técnica. En total, más de 546.000 reclusos cumplieron los criterios de evaluación del Ministerio de Trabajo y recibieron un certificado de aptitud técnica.

98. El Gobierno chino otorga a los reclusos menores de edad, a las reclusas, a los delincuentes de edad avanzada, débiles, enfermos o incapacitados, así como a los reclusos pertenecientes a las minorías nacionales y a los extranjeros, condiciones específicas de vida, de detención y de trabajo, diferentes de las que rigen para los demás reclusos, condiciones que tienen plenamente en cuenta sus particularidades fisiológicas y psicológicas, su estado físico o sus hábitos de vida propios.

Artículo 8

99. Hasta la fecha, China no ha promulgado todavía ninguna ley sobre la extradición, no se ha adherido ni ha ratificado ningún tratado internacional de extradición, ni tampoco ha firmado tratados bilaterales al respecto con otros Estados. No obstante, en la práctica, de conformidad con las obligaciones dimanantes de la Convención, los órganos judiciales aplican las leyes pertinentes a los autores de infracciones penales que se hallan en territorio chino, si se determina que dicha infracción es punible con arreglo al derecho penal de China. Si las condiciones lo permiten, China puede proceder a la extradición al país correspondiente, con objeto de que al interesado se le aplique la sanción legal que merece.

Artículo 9

100. China ha concertado con algunos países tratados de auxilio judicial mutuo en materia civil, comercial y penal, en los que se exponen de forma clara y detallada las modalidades y los medios que se utilizarán para comunicarse mutuamente todas las pruebas relativas al procedimiento penal, las informaciones de carácter jurídico necesarias para el procedimiento judicial, así como los resultados de los procedimientos penales incoados. Indiscutiblemente dichos tratados permiten incoar procedimientos penales respetando las obligaciones establecidas en la Convención. En el futuro, China seguirá concertando acuerdos o tratados de auxilio judicial mutuo con otros países y colaborará, en la medida de lo posible, con los restantes países con objeto de prevenir los delitos.

Artículo 10

101. Para que los funcionarios del Estado, y de forma más particular el personal encargado de la aplicación de la ley en los servicios de la policía, las fiscalías, los tribunales y la administración judicial, puedan estudiar y asimilar los principios y las normas pertinentes del derecho nacional y los elaborados por el sistema de las Naciones Unidas, el Estado ha propiciado en especial la redacción y la publicación de dos libros titulados respectivamente Visión general de los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y Panorama de las actividades de las Naciones Unidas en materia de prevención de delitos y recopilación de instrumentos pertinentes. El Ministerio de Justicia ha publicado algunos documentos, entre ellos, una Recopilación de reglamentos penitenciarios de países extranjeros, en el que figuran determinados instrumentos del sistema de las Naciones Unidas y los reglamentos de la administración penitenciaria de más de 20 países. En todos estos libros y documentos se incluye el texto de la Convención contra la Tortura.

102. Para proteger plenamente la libertad personal de los ciudadanos, impedir que se atente contra su dignidad y evitar todo acto de tortura, los órganos de la seguridad pública han elaborado, además de las medidas existentes que garantizan el respeto del derecho, un conjunto de reglamentos administrativos para el uso del personal que participa en la custodia, la detención y el interrogatorio preliminar durante la instrucción del proceso. En los reglamentos se estipula explícitamente que el control de la actividad judicial no sólo debe ejercerse respecto de la resolución del caso, sino también respecto de los medios utilizados para lograrla y del eventual empleo de la tortura para obtener confesiones. Se conceden recompensas al personal encargado del proceso únicamente si éste se desarrolla de conformidad con la ley y si no se ha utilizado la tortura para arrancar confesiones. Cuando un agente de la seguridad pública recurre a tales medios, incluso en el caso de que las confesiones obtenidas hagan avanzar de forma decisiva la investigación, no sólo no podrá recibir recompensa alguna sino que además deberá instruirse un proceso sobre su responsabilidad penal.

Artículo 11

103. Cada año, los tribunales chinos investigan y juzgan delitos de tortura; en particular examinan casos de confesiones arrancadas mediante la tortura por funcionarios del Estado, y de castigos corporales y otros malos tratos infligidos por el personal penitenciario. La ley prevé dos procedimientos para investigar y juzgar un delito de tortura: o bien los órganos de la seguridad pública o las fiscalías ejercen una acción penal e incoan un proceso y posteriormente transmiten el sumario al tribunal para que dicte sentencia, o bien la investigación es realizada por los órganos administrativos, que se hallan bajo la jurisdicción del Ministerio de Inspección encargado de los asuntos disciplinarios. Cuando los servicios de inspección tropiezan con un caso que podría ser de carácter penal, lo transmiten a los tribunales, que lo instruyen según el procedimiento legal.

104. De conformidad con el artículo 164 del Código de Procedimiento Penal, las fiscalías populares controlan la legalidad de la ejecución de las sentencias y decisiones dictadas en materia penal y de las actividades de las cárceles, centros de detención y establecimientos de rehabilitación por el trabajo. Con objeto de poder investigar las condiciones de vida de los reclusos, la aplicación de las penas, la eventual imposición de castigos corporales u otros malos tratos a los reclusos, las fiscalías de diversos niveles han creado servicios de inspección en los establecimientos penitenciarios. Algunos de estos servicios se han instalado de forma permanente en las cárceles y en los centros de detención, y otros ejercen su control mediante frecuentes visitas. El personal sanitario examina a los reclusos que han sido maltratados por funcionarios de prisiones en infracción de la ley y de la disciplina. En caso de fallecimiento, un médico forense designado por la fiscalía popular o por el tribunal popular realiza la autopsia. Por otro lado, el reglamento penitenciario otorga al detenido el derecho de denunciar los actos ilegales cometidos por funcionarios penitenciarios. Estas denuncias se someten a la fiscalía, al servicio de control de la disciplina o a la autoridad competente de la cárcel.

105. Los diputados de las asambleas populares locales, así como los miembros de la Conferencia consultiva política inspeccionan con frecuencia las cárceles, controlan la aplicación de la ley por el personal penitenciario,

recogen peticiones y toman nota de las denuncias de los detenidos. Estos medios permiten controlar con eficacia la aplicación de la legislación nacional e inducen a los funcionarios a actuar en el marco de la más estricta legalidad.

106. Si una cárcel o una institución de rehabilitación por el trabajo considera, en el transcurso de la aplicación de la pena, que la sentencia fue incorrecta (por ejemplo, condena errónea de un inocente, determinación inexacta de la naturaleza del delito, pena demasiado severa o, por el contrario, demasiado leve), el caso puede devolverse a la fiscalía popular o al tribunal popular que dictó la sentencia. Si un delincuente presenta una petición mientras cumple su condena, la institución de rehabilitación por el trabajo la transmite a la fiscalía popular o al tribunal popular para que siga los trámites pertinentes.

107. De 1983 a 1987, las distintas fiscalías locales examinaron, de conformidad con la ley, más de 30.000 casos de infracción de los derechos de la persona y de los derechos democráticos de los ciudadanos y, de ellos, más de 20.000 se presentaron ante los tribunales. Las acusaciones que se investigaron fueron: confesiones arrancadas mediante la tortura, falsas acusaciones, sabotaje de elecciones, detención ilegal, vigilancia ilegal, registro ilegal, allanamiento ilegal de morada, represalias y golpes premeditados, privación ilegal de la libertad de creencias religiosas y violación de los usos y costumbres de las minorías nacionales, falsos testimonios, violación de la libertad de correspondencia, prevaricación, liberación arbitraria de criminales, bigamia, castigos corporales y otros malos tratos infligidos por funcionarios de prisiones. En la gran mayoría de los casos, estos actos penales no se referían directamente a la aplicación de las leyes por los funcionarios, sino que procedían de un conocimiento insuficiente del derecho y de la legalidad que llevaba a ciudadanos ordinarios a cometer actos contrarios a la ley.

108. En 1990, los servicios de investigación sometieron 279 casos de tortura a las fiscalías, 207 de los cuales dieron lugar a procesos penales. En 1991, estas cifras ascendieron respectivamente a 304 y 279 casos; a una parte de ellos se les aplicó una decisión de dispensa de proceso. Entre las personas procesadas por actos de tortura, algunas fueron condenadas a cadena perpetua y otras a penas de prisión mayor o menor. Al pequeño número de personas a las que no se impuso una sanción penal, los servicios de inspección y los órganos administrativos pertinentes les impusieron sanciones administrativas.

109. En 1983, con objeto de mejorar el sistema judicial, el Gobierno chino decidió transferir la administración de las prisiones y de otros establecimientos penitenciarios al Ministerio de Justicia. De este modo se lograron grandes progresos: primero el perfeccionamiento del sistema jurídico debido a la revitalización de la mutua supervisión y de la interacción de los distintos tribunales; segundo, una distribución más racional del trabajo entre los tribunales; y por último, el fortalecimiento de la función rectora del Ministerio de Justicia respecto de las cárceles. Dicho ministerio inició una serie de reformas especialmente encaminadas a transformar las prisiones en escuelas especializadas en la educación y la rehabilitación de los presos, a implantar una administración científica, acorde con la ley, rigurosa y civilizada, a promover la normalización del trabajo en las cárceles, a motivar

a la sociedad civil para que concierte acuerdos de ayuda mutua y participe en ellos en gran escala y a separar las funciones de detención, administración y educación. Al cabo de muchos años, el porcentaje de reincidentes entre los condenados liberados tras haber purgado su pena se mantiene entre el 6 y el 8%.

110. En China no existen el juicio secreto ni la reclusión secreta. Con arreglo a la ley, las audiencias de los tribunales populares son públicas, excepto en los casos relativos a secretos de Estado, a la vida privada de particulares o a un menor. En todas las causas (incluidos los procesos a puerta cerrada), las sentencias se dictan en audiencias públicas. No existe la reclusión en régimen de incomunicación; no obstante, se mantienen separados a los reclusos de las reclusas, a los adultos de los menores y a los cómplices entre sí.

111. Las cárceles y las instituciones de rehabilitación por el trabajo se ciñen rigurosamente a la ley y sólo aceptan a los delincuentes que se les asignan para cumplir la condena establecida por un tribunal. Si falta un elemento indispensable, o si la sentencia todavía no es ejecutoria, el recluso no es aceptado.

112. En China existen actualmente 684 cárceles (incluidos los campamentos de rehabilitación por el trabajo y los 37 centros de reeducación para delincuentes menores). El número de internos asciende a 1.206.795, es decir, un preso por cada mil habitantes.

Artículo 12

113. De conformidad con la ley, las denuncias por actos de tortura formuladas por ciudadanos o reclusos contra funcionarios públicos se someten a los servicios administrativos o judiciales competentes. Si se comprueba que esos actos se han cometido realmente, son objeto de un riguroso proceso, y cuando se determina que se ha producido un delito, las fiscalías populares someten la causa a los tribunales populares para que dicten sentencia.

114. Las fiscalías populares ejercen un control legal con miras a proteger los legítimos derechos e intereses de los condenados. Para ello, los miembros de las fiscalías destacados con carácter permanente en los centros de detención, no sólo controlan las instalaciones penitenciarias, las condiciones de vida de los reclusos y las actividades de supervisión y de represión para asegurarse de que se realicen conforme a la ley, sino que también se encargan de recoger las observaciones de los detenidos y de tomar nota de sus reclamaciones. Las infracciones de la ley se corrigen sin dilación.

Artículo 13

115. En China, todo ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, denuncias o críticas contra cualquier funcionario por violación de la ley, incluidos los actos de tortura. Todo funcionario público que abuse de sus poderes o utilice su cargo oficial con fines personales, tomando represalias o tendiendo trampas contra personas que hayan formulado reclamaciones, denuncias o críticas, será perseguida con arreglo a la ley. La ley protege a los testigos, los denunciadores o los reclamantes contra los malos tratos o los actos de intimidación que pudieren sufrir a causa de sus denuncias o

testimonio. Los tribunales juzgan con severidad, con arreglo a derecho, los actos de violencia, venganza, intimidación y otros malos tratos cometidos contra testigos o denunciadores.

116. El artículo 41 de la Constitución estipula que "el órgano estatal de que se trate habrá de atender las denuncias, reclamaciones o acusaciones que formule el ciudadano de un modo responsable una vez averiguados los hechos. Nadie podrá desestimar esas denuncias, reclamaciones o acusaciones ni tomar represalias contra los ciudadanos que las formularen". El artículo 146 del Código Penal dispone que, "los funcionarios públicos que abusen de sus poderes o utilicen su cargo oficial con fines personales, tomando represalias o tendiendo trampas contra quienes han formulado reclamaciones, denuncias o críticas, serán condenados a una pena de prisión o de reclusión, que no será superior a dos años. Si las circunstancias son graves, la pena podrá oscilar entre dos y siete años". La expresión "el órgano estatal de que se trate" designa las secciones de inspección que dependen de las fiscalías, los servicios de inspección, los órganos administrativos y todos los organismos de investigación por correspondencia.

Artículo 14

117. El artículo 41 de la Constitución estipula que quienes consideren que determinados órganos o trabajadores del Estado han violado sus derechos cívicos, tienen derecho a ser indemnizados con arreglo a las disposiciones previstas por la ley. En virtud de los artículos 2 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo, todo ciudadano, toda persona jurídica u otra organización que considere que sus legítimos derechos e intereses se han visto afectados por un acto administrativo concreto de un órgano administrativo o del personal de dicho órgano, puede ejercitar una acción ante un tribunal popular de conformidad con el mencionado Código, y reclamar una indemnización. El artículo 68 del mismo Código dispone claramente que, si un acto administrativo específico emprendido por un órgano administrativo o por el personal de un órgano administrativo vulnera los legítimos derechos e intereses de un ciudadano, una persona jurídica o cualquier otra organización y les depara daños y perjuicios, el órgano administrativo, o el órgano administrativo al que pertenece el personal antedicho estará obligado a indemnizar. El importe en concepto de daños y perjuicios se abonará con cargo a su presupuesto. Las autoridades del pueblo en sus diferentes niveles pueden ordenar a los órganos administrativos responsables que paguen una parte o la totalidad de la indemnización. Además, el artículo 53 del Código de Procedimiento Penal estipula que: "Toda persona que haya sufrido daños materiales por efecto de un acto delictivo cometido por el acusado puede, en el transcurso del procedimiento penal, iniciar un proceso civil complementario. De ser necesario, el tribunal popular podrá sellar o confiscar los bienes del acusado". La Ley prevé que las partes pueden dirigirse al tribunal para que éste obligue a pagar a quienes se nieguen a cumplir con su obligación legal en materia de indemnización.

118. La ley garantiza también a la víctima de un acto de tortura el derecho a obtener una reparación moral. De este modo, el artículo 32 del Código Penal prevé que cuando las circunstancias del delito no exigen que se imponga una condena, no podrá imponerse una sanción penal, pero el responsable deberá,

según los casos, ser reprendido, arrepentirse formalmente o presentar sus excusas, indemnizar a la víctima por las pérdidas sufridas, o incluso ser sancionado administrativamente por parte del servicio competente.

119. La ley no establece todavía criterios precisos que permitan determinar el importe en concepto de daños y perjuicios que debe recibir la víctima; los órganos administrativos o judiciales competentes se encargan de establecerlos según los elementos particulares del sumario. Para mejorar la situación en esta esfera, el Estado está acelerando la labor de elaboración del código sobre daños y perjuicios de la República Popular de China. En espera de que se ultime definitivamente dicho código, la indemnización debida a la víctima de un acto de tortura se determina principalmente por vía administrativa o judicial. El órgano administrativo puede establecer, mediante una fórmula la avenencia o mediante la imposición de su autoridad, la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios por gastos médicos, lucro cesante y ayuda alimentaria. Los tribunales pueden también determinar la indemnización al decidir sobre las repercusiones penales de una acción civil complementaria o de un caso de procedimiento administrativo.

Artículo 15

120. Según el Código de Procedimiento Penal, la decisión final se basa en todas las pruebas que demuestran la veracidad de los hechos relacionados con el caso, como, por ejemplo, las pruebas materiales y escritas, las declaraciones de los testigos, las declaraciones de la víctima, las declaraciones y las explicaciones del acusado, las conclusiones de los expertos, los informes de la investigación y de la inspección, etc. El personal del servicio judicial, de las fiscalías y de los órganos de investigación debe recoger pruebas, ajustándose a los métodos legalmente establecidos, para establecer la culpabilidad o la inocencia del acusado, así como la gravedad de su infracción. Dichas pruebas no se pueden tener en cuenta en la decisión final si no han sido confirmadas por la investigación. Para ello, la ley exige que las personas encargadas de aplicar la ley garanticen las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos implicados en un proceso, o que estén en posesión de información relativa a los hechos investigados, puedan prestar testimonio de forma objetiva y completa. Salvo en determinadas circunstancias, puede invitarse a las personas interesadas a colaborar en la investigación. Está estrictamente prohibido recurrir a la tortura para arrancar confesiones o a otros métodos ilegales para obtener o falsificar pruebas. De ser así, el infractor incurre en responsabilidad jurídica y se anulan las pruebas obtenidas de ese modo.

121. Al decidir sobre un caso, los tribunales populares dan prioridad a las pruebas, a la investigación y las pesquisas y no confían automáticamente en las declaraciones orales. Así pues, si los tribunales sólo disponen de la confesión del acusado sin contar con otras pruebas, no pueden declararle culpable ni imponerle una sanción penal. En cambio, si el acusado no ha confesado pero se dispone de pruebas completas y convincentes, puede ser declarado culpable y se le puede aplicar una pena. Por otro lado, la ley dispone que las personas con deficiencias físicas o mentales, o las personas muy jóvenes, es decir, que no son capaces de distinguir entre lo verdadero y lo falso o no pueden expresarse correctamente, no pueden intervenir como testigos.

122. En la audiencia, las declaraciones de los testigos deben ser sometidas al interrogatorio y contrainterrogatorio de ambas partes -fiscal y víctima, así como acusado y defensor- y los testimonios de todas las partes sólo podrán ser tenidos en cuenta en la decisión final tras ser escuchados y verificados. Si el tribunal comprueba que un testimonio se ha obtenido mediante tortura, o que un testigo ha prestado deliberadamente falso testimonio o ha ocultado pruebas de cargo, sancionará a los autores de las infracciones con arreglo a la ley.

Artículo 16

123. Como en la mayoría de los demás países, en China sigue vigente la pena de muerte, lo que se explica por la situación del país y por el deseo del pueblo. No obstante, la ley sólo impone la pena capital en condiciones sumamente estrictas. En efecto, el artículo 43 del Código Penal dispone que: "Sólo se aplicará la pena de muerte a los criminales declarados culpables de los crímenes más odiosos. Cuando un criminal ha sido condenado a muerte y no es indispensable aplicar inmediatamente la sentencia, puede suspenderse la ejecución durante un período de dos años, durante el cual el condenado queda sujeto a la rehabilitación por el trabajo y, una vez finalizado, se examina su comportamiento". Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 44 del Código Penal: "La pena de muerte no puede aplicarse a las personas que no hayan cumplido 18 años en el momento de cometer el delito ni a las mujeres que se hallen embarazadas durante el juicio".

124. China, que vela en particular por proteger el derecho a la vida de los ciudadanos y la inviolabilidad de sus legítimos derechos e intereses, se opone a las ejecuciones arbitrarias y sumarias. El Código Penal prevé garantías de seriedad y de prudencia. Toda condena a la pena de muerte debe ser aprobada por el Tribunal Popular Supremo, salvo cuando por disposición de la ley es directamente este Tribunal el que dicta sentencia o, en determinados casos, por un tribunal popular de nivel superior en el que el Tribunal Supremo haya delegado su poder de aprobación. Los casos punibles con la pena de muerte son juzgados en primera instancia por los tribunales populares de nivel intermedio, y en segunda y en última instancia por los tribunales populares de nivel superior. Los delitos punibles con la pena de muerte que, a escala provincial, revisten gran importancia son juzgados en primera instancia por los tribunales populares de nivel superior y por el Tribunal Popular Supremo en segunda y última instancia. Los delitos punibles con la pena de muerte que tienen repercusiones a escala nacional son juzgados en primera y última instancia por el Tribunal Popular Supremo.

125. China adopta una actitud muy prudente en lo tocante a la aplicación de la pena capital. El Código de Procedimiento Penal prevé a este respecto un procedimiento particular de verificación, en virtud del cual las penas de muerte confirmadas en segunda instancia no son todavía ejecutorias. La ley estipula que el Tribunal Popular Supremo o el tribunal popular de nivel superior con la autorización del Supremo, debe verificar minuciosamente la exactitud de los hechos, de las pruebas, de la determinación del crimen y de la condena así como la regularidad del procedimiento judicial, antes de aprobar la pena de muerte y hacerla, por consiguiente, ejecutoria. Si entre la condena y la ejecución se concluye que la sentencia puede haber sido

errónea o se descubre que la condenada está embarazada, se suspenderá la aplicación de la pena y el tribunal encargado de dar la aprobación, al que se habrá informado sobre la cuestión, ordenará suspender la ejecución.

126. De conformidad con el artículo 45 del Código Penal, todo condenado a la pena de muerte es fusilado.

127. La suspensión de la ejecución de la pena capital permite reducir el número de ejecuciones. En realidad la suspensión tiene por objeto limitar al máximo la aplicación de la pena de muerte. Por este motivo la ley estipula que, si un condenado a muerte manifiesta verdaderos signos de arrepentimiento, al término de un intervalo de dos años, puede conmutarse la pena capital por la de cadena perpetua. Si estos signos reales de arrepentimiento van acompañados por un comportamiento ejemplar, al expirar el plazo de la suspensión, la condena podrá convertirse en una pena de prisión de 15 a 20 años. Tan sólo se ejecuta la pena, tras la decisión o la aprobación del Tribunal Popular Supremo o del tribunal popular de nivel superior habilitado a este fin, de quienes se niegan obstinadamente a enmendarse, en particular cuando se ha determinado que han cometido premeditadamente un nuevo crimen mientras cumplían su condena.

128. Una prolongada práctica judicial demuestra que los condenados a muerte con la sentencia en suspenso durante dos años no sienten, durante ese período, la amenaza de la ejecución y, por consiguiente, no puede hablarse de tortura moral al respecto. Dado que la inmensa mayoría de esos condenados, cuando expira la suspensión, se benefician de una reducción de su pena, la pena de muerte sólo se aplica en casos excepcionales. Por este motivo, los delincuentes saben que para no ser condenados a muerte les basta con no negarse a corregirse. Saben asimismo que si, además, manifiestan signos reales de arrepentimiento y adoptan un comportamiento ejemplar, puede conmutarse su pena por la de prisión temporal. El personal penitenciario también les presta ayuda y les da importantes consejos a fin de que puedan reconocer que su comportamiento delictivo es perjudicial y comprender que el objetivo del sistema de suspensión de la pena de muerte es ofrecerles una salida. El personal penitenciario les alienta a luchar activamente para obtener una reducción de la pena. La experiencia judicial indica que al cabo de dos años, al 99% de los condenados a muerte con suspensión de sentencia, se les conmuta su condena en pena de prisión o en cadena perpetua. Los condenados a cadena perpetua todavía pueden, si se corrigen y muestran una conducta ejemplar, beneficiarse de una pena de prisión temporal. Así pues, cabe afirmar que el sistema de condena a muerte con suspensión de la sentencia está adaptado a la situación del país y respeta plenamente los derechos humanos y los principios humanitarios que China siempre ha afirmado.

129. En la Constitución de China figura una disposición relativa a la amnistía pero no prevé el derecho de gracia. En ella se estipula que el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional puede decretar una amnistía. Desde 1959 ha habido en total siete amnistías.

Anexo

PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITE CONTRA LA TORTURA
DURANTE EL EXAMEN DEL INFORME INICIAL DE CHINA SOBRE LA APLICACION
DE LA CONVENCION, Y REFERENCIAS DE LAS RESPUESTAS EN EL
PRESENTE INFORME

1. ¿Cuál es el lugar que ocupa la Convención en el derecho interno chino? ¿Existen en el derecho interno chino disposiciones que corresponden a cada artículo de la Convención? (Sra. Chanet y Sres. Gil Valedra y Voyame)

Véanse los párrafos 61, 62 y 63 del presente informe.

2. ¿Está tipificado en particular en la legislación china el delito de tortura? ¿Incluye exactamente esta definición la definición de la tortura que aparece en la Convención? (Sra. Chanet y Sr. Burns)

Véanse los párrafos 62 y 63 del presente informe.

3. ¿Cón qué severidad se castiga el delito de tortura en relación con otros delitos? ¿Qué sanciones se aplican contra el delito de la tortura? El hecho de que la pena máxima prevista sea de tres años no parece indicar que la tortura esté considerada como un delito particularmente grave. (Sr. Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 62, 74, 75, 80 y 81 del presente informe.

4. ¿Autoriza la legislación china ciertas formas de castigos corporales? En caso afirmativo, ¿cuáles son esos castigos? ¿Se han aplicado recientemente esos castigos? (Sr. Burns)

Véanse los párrafos 75 y 76 del presente informe.

5. ¿Reprime China las torturas morales? (Sr. Voyame)

Véase el párrafo 77 del presente informe.

6. El hecho de que realizar propaganda contrarrevolucionaria o insultar al ejército constituyan delito puede dar lugar a importantes abusos. (Sr. Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 50 y 51 del presente informe.

7. ¿Es posible en China justificar o excusar un acto de tortura cometido en ejecución de una orden superior? ¿Se consideran los disturbios internos como una circunstancia que permite el incumplimiento de la Convención? (Sr. Gil Lavedra)

Véase el párrafo 71 del presente informe.

8. La práctica de la reeducación de los contrarrevolucionarios (a los que se considera presos políticos) mediante el trabajo forzoso parece contraria al

artículo 16 de la Convención. Una descripción de las condiciones en las que se lleva a cabo ese trabajo permitiría tal vez al Comité comprobar que no se trata de un trato cruel, inhumano o degradante. (Sra. Chanet)

Véase el párrafo 52 del presente informe.

9. ¿Existen ejemplos de casos en que se haya condenado a personas reconocidas culpables de torturas? (Sr. Voyame)

Véase el párrafo 108 del presente informe.

10. En el párrafo 23 de su informe inicial, China ha mencionado que se habían examinado más de 30.000 casos de violaciones de los derechos de las personas y de los derechos democráticos y que más de 20.000 de ellos habían sido sometidos a los tribunales; ¿cuál es el carácter de esas causas? (Sr. Sorensen, Sra. Chanet y Sres. Jitrin y Mijailov)

Véase el párrafo 107 del presente informe.

11. ¿Tienen derecho los ciudadanos chinos a presentar una denuncia por un acto de tortura? ¿Tienen también los extranjeros ese derecho? (Sra. Chanet)

Véanse los párrafos 40 y 72 del presente informe.

12. ¿Qué autoridad recibe las denuncias presentadas por los ciudadanos en materia de tortura? (Sr. Dipanda Mouelle)

Véanse los párrafos 34, 113, 114, 115 y 116 del presente informe.

13. En la legislación china se prohíbe la invención o la deformación de los hechos, pero teniendo en cuenta que por lo general es difícil demostrar un acto de tortura, ¿cuáles son los medios de que dispone el ciudadano chino para aportar esa prueba? Teniendo en cuenta que, según los párrafos 30 y 31 del informe inicial, la investigación en materia de tortura se encomienda al cuerpo de funcionarios sobre el que recaen las sospechas o a la autoridad jerárquica directa ¿resulta eficaz esta forma de proceder? (Sra. Chanet)

Véanse los párrafos 39, 40, 57, 58, 59 y 104 del presente informe.

14. ¿Cuál es el número de quejas presentadas en China por casos de tortura? ¿Cuántas han sido declaradas admisibles? ¿Qué sanciones se han aplicado? (Sr. Jitrin)

Véase el párrafo 108 del presente informe.

15. ¿Existe una ley especial relativa a la indemnización a las personas que han sido torturadas? ¿Cómo se lleva a la práctica esa disposición? ¿Cuál es el procedimiento para indemnizar a las víctimas? (Sres. Mijailov y Voyame)

Véanse los párrafos 117, 118 y 119 del presente informe.

16. ¿Pueden recibir las víctimas de la tortura la reparación moral y el tratamiento médico que requieran? (Sr. Sorensen)

Véase el párrafo 118 del presente informe.

17. Con arreglo al artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo, los miembros del personal de un órgano administrativo que hayan cometido un error patente o intencionado son responsables del pago de la indemnización ¿cuáles son, entonces, las garantías en materia civil, penal o administrativa de la aplicación de esta disposición? (Sr. Mijailov)

Véase el párrafo 117 del presente informe.

18. ¿Existe en la legislación china una disposición que prohíba retener como prueba una declaración obtenida bajo tortura? (Sra. Chanet, Sres. Gil Lavedra, Burns y Voyame)

Véanse los párrafos 40 y 120 del presente informe.

19. ¿Existe en la legislación china una disposición referente a la competencia para conocer de violaciones de la Convención cometidas en el extranjero por extranjeros? (Sra. Chanet)

Véanse los párrafos 82, 83 y 84 del presente informe.

20. Sería conveniente que China facilitase detalles sobre la aplicación de los artículos de la Convención que tratan de la competencia universal y de la extradición. (Sr. Voyame)

Véanse los párrafos 71, 82, 83, 99 y 100 del presente informe.

21. ¿Cómo ve la China por la divulgación en la enseñanza y de la información sobre la prohibición de la tortura? (Sr. Sorensen)

Véanse los párrafos 68, 69, 70 y 101 del presente informe.

22. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por China para difundir la Convención entre la población? (Sr. Jitrin)

Véanse los párrafos 69, 70 y 101 del presente informe.

23. ¿Cuáles son los medios a los que recurre China para lograr la eliminación definitiva de la tortura? (Sr. Sorensen)

Véanse los párrafos 64, 65, 66, 67, 102 y 103 del presente informe.

24. En el párrafo 46 del informe inicial se indica que un agente de seguridad pública puede detener a toda persona "cuya culpabilidad quede demostrada con pruebas concluyentes". ¿Cómo puede el agente de seguridad pública determinar la culpabilidad de una persona que todavía no ha sido juzgada por un tribunal? (Sr. Dipanda Mouelle)

Véanse los párrafos 113, 114 y 115 del presente informe.

25. El artículo 43 del Código de Procedimiento Penal estipula que cuando se detenga a un delincuente la familia de la persona detenida no recibirá notificación "en aquellos casos en que esa notificación entorpezca la investigación". ¿Qué significa la expresión "entorpezca la investigación"?

¿Existen restricciones legales para la aplicación de esta disposición?
¿Se hace uso de ella con frecuencia? ¿Existen en este sector garantías de procedimiento para evitar los abusos? (Sres. Sorensen, Mijailov, Voyame y Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 85 y 86 del presente informe.

26. ¿Cuáles son las funciones de los miembros de las fuerzas armadas en materia de detención? (Sr. Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 30, 66, 72 y 85 del presente informe.

27. ¿Existen en China los procesos y la detención en secreto? En caso afirmativo ¿cuáles son su duración y sus límites y de qué garantías jurídicas disfruta el detenido? (Sres. Burns y Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 66, 67, 85, 87, 88, 89, 110 y 111 del presente informe.

28. ¿Se han puesto en conocimiento de las autoridades chinas casos de detenciones extrajudiciales y de detenciones clandestinas o ilegales? ¿Se ha buscado a los responsables? (Sres. Gil Lavedra y Voyame)

Véase el párrafo 107 del presente informe.

29. ¿Cuál es la duración de la detención provisional? ¿Puede someterse a los detenidos a reconocimientos médicos? (Sr. Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 66, 88 y 89 del presente informe.

30. ¿Comparecen rápidamente las personas detenidas ante un juez? (Sr. Voyame)

Véanse los párrafos 88 y 89 del presente informe.

31. La transferencia de la administración de los centros penitenciarios al Ministerio de Justicia ¿ha permitido, en la práctica, realizar algún progreso? (Sr. Dipanda Mouelle)

Véase el párrafo 109 del presente informe.

32. ¿Cuántas prisiones y reclusos hay en China? (Sr. Burns)

Véase el párrafo 112 del presente informe.

33. ¿Cuáles son los mecanismos de que se dispone para controlar las condiciones de encarcelamiento de los detenidos a fin de evitar los casos de tortura? (Sr. Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 59, 104, 105, 114 y 115 del presente informe.

34. ¿Tienen los detenidos derecho a presentar quejas? (Sr. Voyame)

Véanse los párrafos 93, 104, 105 y 114 del presente informe.

35. ¿Cuál es la función del personal médico en los centros de detención y en la comprobación de casos de tortura? ¿Puede un detenido exigir un reconocimiento médico? ¿Se lleva a cabo de manera eficaz e independiente la vigilancia médica de las personas detenidas? ¿Es el interesado o la autoridad pública quien designa al médico? (Sres. Sorensen y Voyame y Sra. Chanet)

Véanse los párrafos 95 y 104 del presente informe.

36. ¿Cuál es la diferencia, en el derecho chino, entre la reeducación por el trabajo y la rehabilitación por el trabajo? (Sr. Burns)

Véanse los párrafos 42, 45, 46, 47 y 48 del presente informe.

37. ¿Cuál es la duración media de las penas de prisión que se imponen a los presos políticos? ¿Cuáles son los motivos de su condena? ¿Qué trato se les reserva? (Sr. Sorensen)

Véanse los párrafos 49, 50, 51 y 52 del presente informe.

38. ¿Cuál es el trato que se aplica a los disidentes políticos en comparación con otros detenidos? (Sr. Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 49, 50, 51 y 52 del presente informe.

39. ¿Existen establecimientos de reeducación específicos para los delincuentes contrarrevolucionarios? (Sr. Jitrin)

Véase el párrafo 52 del presente informe.

41. ¿Cuáles son las relaciones entre los tribunales, el ministerio fiscal, los órganos de la seguridad pública, el Ministerio de Justicia y las demás autoridades judiciales? ¿Se rigen los poderes y las competencias de los órganos de la seguridad pública por otras leyes diferentes del Código de Procedimiento Penal? (Sres. Dipanda Mouelle, Jitrin, Mijailov y Voyame)

Véanse los párrafos 29, 30, 31 y 32 del presente informe.

42. ¿Cuáles son las similitudes en materia de jurisdicción entre el servicio encargado de los asuntos disciplinarios del ministerio público y los tribunales? (Sra. Chanet)

Véanse los párrafos 35, 36 y 65 del presente informe.

43. ¿Cuáles son la organización y la estructura del sistema judicial? ¿Cuáles son las características y competencia de las diversas jurisdicciones, especialmente de los tribunales populares, de los tribunales de excepción y de los tribunales militares, así como de los tribunales administrativos? (Sr. Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 14, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del presente informe.

44. ¿Cómo se delimitan las competencias entre los tribunales administrativos y los órganos de control, en particular para impedir la práctica de la tortura? (Sr. Gil Lavedra)

Véase el párrafo 58 del presente informe.

45. ¿Cómo se designa a los fiscales y a los jueces? (Sres. Burns y Dipanda Mouelle)

Véase el párrafo 28 del presente informe.

46. ¿Cómo garantiza la legislación china, la independencia de los tribunales y de los fiscales? (Sres. Burns y Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 30 y 31 del presente informe.

47. Se agradecería información sobre el sistema jurídico chino, incluido el texto de las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal, así como información detallada sobre las sanciones impuestas, con explicaciones precisas. (Sr. Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 42 del presente informe.

48. Se agradecería información sobre los principios constitucionales que se aplican en derecho penal, con especial referencia a la presunción de inocencia y a los principios enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Sr. Gil Lavedra)

Véanse los párrafos 30, 31, 62, 65, 72, 74 y 75 del presente informe.

49. ¿Existe una disposición más precisa sobre la aplicación del artículo 3 del Código Penal (que trata de la competencia territorial)? En particular, ¿cómo debe interpretarse la restricción: "a menos que se apliquen al caso disposiciones legales especiales"? (Sr. Jitrin)

Véanse los párrafos 82 y 83 del presente informe.

50. ¿Cuáles son las competencias jurídicas de las autoridades militares en materia de represión de las actividades contrarrevolucionarias? (Sra. Chanet)

Véanse los párrafos 20, 21, 24 y 27 del presente informe.

51. ¿Cuáles son los recursos posibles una vez pronunciada la pena de muerte? ¿Cuál es la forma de ejecución? (Sr. Burns y Sra. Chanet)

Véanse los párrafos 123, 124, 125 y 126 del presente informe.

52. La suspensión de la pena de muerte ¿no equivale a un acto de tortura, dado que el condenado ignora durante mucho tiempo si la sentencia será o no ejecutada? (Sra. Chanet y Sr. Dipanda Mouelle)

Véanse los párrafos 127 y 128 del presente informe.

53. ¿Prevé la Ley recursos tales como el indulto o la amnistía?
(Sra. Díaz Palacios)

Véase el párrafo 129 del presente informe.

54. ¿Por qué medios se realizan en China las actividades de información jurídica? (Sra. Díaz Palacios)

Véanse los párrafos 68, 69, 70, 101 y 102 del presente informe.

Nota:

Las preguntas no están clasificadas y se enumeran en el orden en que las formularon los miembros del Comité. La presente lista se facilita a título de referencia, con objeto de dar a conocer de forma más objetiva y más exacta las preocupaciones expresadas por los miembros del Comité durante el examen que realizaron del informe inicial de China, así como las respuestas dadas en el presente informe complementario.
